

# La gestión pública de gobiernos locales peruanos: un enfoque hacia la gobernanza eficiente



Rober Anibal Luciano Alipio  
Jose Carlos Vilca Narvaez  
Wilber Jimenez Mendoza

Emérito Felipe Zavala Benites  
Willian Perez Sullcaray

EDITORIAL  
**CICI**

CENTRO DE INVESTIGACIONES  
Y CAPACITACIONES  
INTERDISCIPLINARES

ISBN 978-628-97086-5-3

## AUTORES

<p><b>Rober Aníbal Luciano Alipio</b> Doctor en Administración Docente Principal - Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Email: <a href="mailto:rluciano@unaat.edu.pe">rluciano@unaat.edu.pe</a> Orcid: <a href="https://orcid.org/0000-0001-9555-6690">https://orcid.org/0000-0001-9555-6690</a></p>	<p><b>Wilber Jimenez Mendoza</b> Doctor en Administración Docente Principal – Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Email: <a href="mailto:wjimenez@unamba.edu.pe">wjimenez@unamba.edu.pe</a> Orcid: <a href="https://orcid.org/0000-0002-1103-6872">https://orcid.org/0000-0002-1103-6872</a></p>
<p><b>Jose Carlos Vilca Narvaez</b> Maestro en Gerencia Pública Docente Asociado – Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Email: <a href="mailto:jvilca@unamba.edu.pe">jvilca@unamba.edu.pe</a> Orcid: <a href="https://orcid.org/0000-0002-1446-3327">https://orcid.org/0000-0002-1446-3327</a></p>	<p><b>Willian Perez Sulcaray</b> Maestro en ciencias ingeniería, especialidad: planeación estratégica y gestión en ingeniería de proyectos Docente Asociado- Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Email: <a href="mailto:wperez@unaat.edu.pe">wperez@unaat.edu.pe</a> Orcid: <a href="https://orcid.org/0000-0002-6320-0048">https://orcid.org/0000-0002-6320-0048</a></p>
<p><b>Emérito Felipe Zavala Benites</b> Doctor en Planificación y Gestión Docente Asociado – Universidad Nacional de Trujillo Email: <a href="mailto:ezvala@unitru.edu.pe">ezvala@unitru.edu.pe</a> Orcid: <a href="https://orcid.org/0000-0002-6520-4675">https://orcid.org/0000-0002-6520-4675</a></p>	

**CICI** | **CENTRO DE INVESTIGACIONES  
Y CAPACITACIONES  
INTERDISCIPLINARES**

**Editor:** Alain Fitzgerald Castro Alfaro

Título:

La gestión pública de gobiernos locales peruanos: un enfoque hacia la gobernanza eficiente

**Autores:** Rober Aníbal Luciano Alipio, Wilber Jiménez Mendoza, José Carlos Vilca Narváez, Willian Pérez Sulcaray, Emérito Felipe Zavala Benites

**ISBN digital:** 978-628-97086-5-3

**Sello Editorial:**

Editorial Centro de Investigaciones y Capacitaciones Interdisciplinarias SAS – CICI

**Coordinadora:** Nora González Pérez –Cartagena –Colombia

**Portada y diagramación:** Linda Castro González

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons – Atribución – No comercial – Sin Derivar 4.0 internacional

[https://co.creativecommons.org/?page\\_id=13](https://co.creativecommons.org/?page_id=13)



Cartagena –Colombia, Agosto de 2025

# **LA GESTIÓN PÚBLICA DE GOBIERNOS LOCALES PERUANOS: UN ENFOQUE HACIA LA GOBERNANZA EFICIENTE**

**ROBER ANÍBAL LUCIANO ALIPIO  
WILBER JIMÉNEZ MENDOZA  
JOSÉ CARLOS VILCA NARVÁEZ  
WILLIAN PÉREZ SULLCARAY  
EMÉRITO FELIPE ZAVALA BENITES**

**Colombia  
Latinoamérica**

**2025**

## Tabla de contenido

Resumen.....	5
Capítulo I - Introducción .....	8
Capítulo II – Fundamentos teóricos de la gestión publica.....	13
2.1. Gestión pública .....	19
2.2. Gobernanza pública .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.3. Relación de la gestión con la gobernanza pública .....	37
Capítulo III - Metodología .....	42
3.1. Metodología .....	<b>4¡Error! Marcador no definido.</b>
3.2. Población y muestra.....	443
3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos .....	45
3.4. Procedimiento .....	48
Capítulo IV - Resultados.....	50
4.1. Resultados descriptivos.....	51
4.2. Resultados inferenciales.....	62
Capítulo V – Discusión y conclusiones.....	70
5.1 Discusión.....	71
5.2. Conclusiones.....	97
Referencias bibliográficas.....	99

## RESUMEN

Esta investigación tuvo el propósito principal de determinar como la gestión pública influye en la gobernanza pública en gobiernos locales peruanos. Desde el punto metodológico, se enmarca dentro de la investigación básica, como enfoque se adhirió al cuantitativo, siguiendo como diseño el no experimental. Como población para el estudio, se recurrió a los trabajadores de los gobiernos locales, seleccionándose una muestra por conveniencia de 345 personas de diversas partes del país. Los datos fueron recolectados mediante encuestas, utilizando un cuestionario de 31 ítems diseñado para medir ambas variables, el cual fue previamente validado por juicio de expertos y cuya confiabilidad se confirmó con alfas de Cronbach altas. Los datos fueron procesados utilizando el SPSS, aplicando tablas descriptivas, pruebas de normalidad y regresiones ordinales de tal manera que se pudiera validar las hipótesis propuestas. Los resultados revelaron que la gestión pública fue percibida mayoritariamente como regular (48.7%), mientras que la gobernanza pública también fue calificada en su mayoría como regular (54.5%). Se observó que la gestión pública explica el 87.6% de cómo se comporta la variable gobernanza pública, lo que muestra un alto nivel de influencia de la primera sobre la segunda. Este hallazgo subraya la importancia de una gestión pública eficiente para mejorar la gobernanza local, evidenciando que, a pesar de las percepciones de deficiencia en ambos aspectos, la gestión pública tiene un impacto directo en la calidad de la gobernanza. Se concluye que la gestión pública juega un papel fundamental en el impulso de procesos de participación ciudadana efectivos en los municipios, lo que es clave para fortalecer la democracia local.

**Palabras clave:** Gestión pública, gobernanza pública, municipios, participación ciudadana, trabajadores municipales.

## ABSTRACT

The book entitled "Public management of Peruvian local governments: an approach towards efficient governance", whose main purpose is to determine how public management influences public governance in Peruvian local governments. From a methodological point of view, it is framed within basic research, with a quantitative approach and a non-experimental design. The study population was local government workers, selecting a convenience sample of 345 people from different parts of the country. The data were collected through surveys, using a 31-item questionnaire designed to measure both variables, which was previously validated by expert judgment and whose reliability was confirmed with high Cronbach's alphas. The data were processed using SPSS, applying descriptive tables, normality tests and ordinal regressions in such a way that the proposed hypotheses could be validated. The results revealed that public management was mostly perceived as average (48.7%), while public governance was also mostly rated as average (54.5%). It was observed that public management explains 87.6% of how the variable public governance behaves, which shows a high level of influence of the former on the latter. This finding underlines the importance of efficient public management to improve local governance, showing that, despite perceptions of deficiency in both aspects, public management has a direct impact on the quality of governance. It is concluded that public management plays a fundamental role in promoting effective citizen participation processes in municipalities, which is key to strengthening local democracy.

**Keywords:** Public management, public governance, municipalities, citizen participation, municipal workers.

## EVALUACIÓN POR PARES

El libro titulado: **La gestión pública de gobiernos locales peruanos: un enfoque hacia la gobernanza eficiente**, es producto resultado de investigación, el cual ha sido arbitrado. El libro ha cumplido de manera satisfactoria el proceso de evaluación científico académico, siendo revisado con el sistema de doble par ciego, por árbitros nacionales expertos en el área y externos a la editorial que dan aval a la respectiva publicación, estos recomendaron la publicación de este libro. A su vez, se deja constancia que las evaluaciones de los pares ciegos son de carácter confidencial para la editorial. El libro se encuentra registrado para la versión digital con el ISBN: 978-628-97086-5-3

Editorial CICI

# Capítulo I

## INTRODUCCIÓN

---

En la última década, la gestión pública ha experimentado una evolución significativa, marcando un cambio paradigmático de modelos predominantemente burocráticos hacia un enfoque más eficiente y orientado al logro de resultados concretos, según lo planteado por Chowdhury y Shil (2017). Este cambio no solo refleja un esfuerzo por modernizar las estructuras gubernamentales, sino también por responder a las crecientes demandas sociales de mayor transparencia, eficacia y pertinencia en los servicios públicos.

La misión fundamental de la gestión pública radica en garantizar servicios de calidad que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para ello, es esencial planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos del Estado de manera óptima, asegurando que cada institución cumpla con los objetivos establecidos en sus planes estratégicos, tal como señala Stroinska (2020). Esto implica no solo una administración eficaz de recursos materiales y financieros, sino también una gestión que potencie el capital humano, promueva la innovación y adopte tecnologías que optimicen los procesos administrativos.

Sin embargo, la eficiencia por sí sola no es suficiente. La gestión pública contemporánea debe adoptar un enfoque integral que incorpore principios de inclusión, transparencia y participación ciudadana, elementos que son fundamentales para consolidar la gobernanza. Como lo argumentan Cocciasecca et al. (2021), una gestión pública abierta debe fomentar espacios de diálogo y colaboración entre el Estado, la sociedad civil y otros actores relevantes. Esto permite no solo integrar las recomendaciones y necesidades expresadas por las comunidades, sino también legitimar las decisiones gubernamentales y fortalecer el tejido social mediante la corresponsabilidad en la formulación e implementación de políticas públicas.

Además, la gobernanza como concepto clave en este proceso implica un marco de gestión orientado al desarrollo integral de los pueblos. Esto conlleva la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales, fomentar la cohesión social y garantizar que las estrategias adoptadas tengan un impacto positivo en el bienestar de las comunidades. La inclusión de múltiples actores, tanto públicos como privados, así como el respeto por la

diversidad y las particularidades culturales, son elementos esenciales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

El nuevo paradigma de la gestión pública, conocido como nueva gestión pública (NGP), plantea mejoras sustanciales en la administración estatal al centrarse en la entrega eficiente de servicios y bienes públicos a la comunidad, como lo señalan Lapuente y Van de Walle (2020). Este enfoque enfatiza la necesidad de transformar el quehacer público mediante la adopción de principios gerenciales que tradicionalmente se han asociado al sector privado, incluyendo la orientación hacia resultados, la optimización de recursos y la satisfacción de las necesidades ciudadanas.

Según Valdez (2019), es imperativo reducir al máximo las prácticas burocráticas ineficientes que han caracterizado a las administraciones públicas tradicionales. En su lugar, se debe promover una gestión más competitiva, que se distinga por la excelencia y calidad en todos los procesos y productos. Esto implica racionalizar de manera adecuada los recursos humanos, financieros y logísticos, garantizando una administración pública más ágil y efectiva.

La implementación de esta nueva gestión pública también requiere una adaptación y réplica de las mejores prácticas administrativas del sector privado, cuya principal característica radica en la eficiencia y la eficacia. Como señalan Huijbregts et al. (2022), este enfoque busca continuamente reducir los tiempos y costos asociados a la prestación de servicios públicos, lo que no solo optimiza la operatividad estatal, sino que también mejora la experiencia ciudadana al interactuar con las instituciones del Estado.

En los últimos años, la administración a nivel de los gobiernos locales ha enfrentado un deterioro significativo en su gestión y gobernanza, afectando gravemente los índices de credibilidad y confianza ciudadana. Diversos factores, como la corrupción, la incompetencia administrativa y el escaso logro de los objetivos y metas propuestas, han contribuido a esta situación crítica, como señala Juárez-García (2021). Estas deficiencias no solo han reducido los niveles de aprobación de las autoridades locales, sino que también han limitado significativamente su capacidad para implementar políticas públicas efectivas.

Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de este panorama adverso, los gobiernos locales desempeñan un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, tal como indican Rao y Yan (2020). Para lograr este objetivo, resulta fundamental fortalecer las capacidades institucionales mediante estrategias de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, así como implementar mecanismos de supervisión y control que reduzcan la corrupción y promuevan una administración eficiente.

Por lo tanto, los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en términos de credibilidad y eficiencia demandan una transformación profunda en sus estructuras y prácticas administrativas. Solo mediante un compromiso genuino con la gobernanza responsable y una orientación hacia el logro de resultados significativos, será posible restaurar la confianza ciudadana y generar impactos positivos y sostenibles en las comunidades.

Diversos estudios han explorado la relación entre la gestión pública y la gobernanza, identificando estrategias clave para mejorar su integración. Latanza Indahsari y Jaja Raharja (2020) destacan tres enfoques fundamentales que pueden transformar la administración pública: la reorganización de los procesos administrativos en el ámbito público, la descentralización mediante la creación de alianzas y redes, y la promoción de ideas y propuestas innovadoras que contribuyan a una gobernabilidad más eficiente. Estos enfoques no solo buscan optimizar el funcionamiento interno de las instituciones, sino también fortalecer la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

En el contexto local, Delgado et al. (2018) evidencian que la gestión pública en los gobiernos locales del norte peruano guarda una relación positiva con la rendición de cuentas y la estabilidad política. Estos factores inciden directamente en la reducción de la violencia social, favoreciendo significativamente la gobernabilidad. Este hallazgo subraya la importancia de una administración transparente y responsable, capaz de generar confianza y promover el desarrollo social mediante la implementación de estrategias que prioricen la inclusión y el bienestar ciudadano.

En función de la problemática planteada, la presente investigación se orienta a responder la siguiente pregunta central: ¿Cómo se interrelacionan la gestión y la gobernanza pública en el contexto de los gobiernos locales en el Perú? Este interrogante busca explorar y comprender las dinámicas, enfoques y sinergias entre ambos conceptos en un entorno de creciente complejidad administrativa y sociopolítica, considerando las particularidades que caracterizan a los gobiernos locales en el país.

El presente estudio fundamenta su justificación desde una perspectiva teórica, dado que establece vínculos entre las teorías de la gestión pública y la gobernanza pública en el contexto específico de los gobiernos locales. Siendo uno de los propósitos generar resultados empíricos que no solo permitan corroborar la relación propuesta, sino que también demuestren su viabilidad, fortaleciendo así el marco teórico subyacente. En un escenario caracterizado por crecientes desafíos administrativos y sociales, el análisis adquiere relevancia al considerar la necesidad imperativa de una gestión pública eficiente que facilite la implementación de procesos participativos y la integración activa de actores sociales. Estos procesos se orientan hacia la creación de espacios públicos de análisis, debate y construcción colectiva de soluciones consensuadas frente a los complejos problemas que enfrentan los gobiernos subnacionales en la actualidad. Desde una perspectiva metodológica, el estudio busca contribuir mediante el diseño y validación de instrumentos robustos para la recolección de información, los cuales pueden ser utilizados y complementados por futuros investigadores. Esto no solo permitiría seguir evaluando la relación entre las variables analizadas, sino también explorar nuevas interacciones con otras variables relevantes, generando resultados que continúen ampliando y profundizando la comprensión de estas relaciones.

# Capítulo II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

---

## **2.1. Gestión pública**

La gestión y gobernanza pública son disciplinas fundamentales en el desarrollo y sostenimiento de sociedades democráticas y equitativas. En las últimas décadas, estas áreas han experimentado una evolución significativa, impulsada por cambios en las dinámicas sociales, económicas y tecnológicas, así como por las crecientes demandas ciudadanas de transparencia, eficiencia y participación. La revisión de la literatura en este campo busca identificar las principales teorías, enfoques y tendencias que han moldeado su desarrollo, desde los modelos tradicionales de administración pública hasta las perspectivas contemporáneas que integran la colaboración intersectorial, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías innovadoras. Este análisis permite no solo comprender los avances teóricos y prácticos, sino también identificar los desafíos y oportunidades emergentes para fortalecer la capacidad de los gobiernos de responder a las complejidades actuales.

Como fundamento de la primera variable, gestión pública, se ha reflexionado en torno a las teorías de la administración pública que han evolucionado a través de diversas fases históricas, marcadas por transformaciones significativas en sus enfoques y objetivos. En sus inicios, la administración pública estuvo caracterizada por un modelo predominantemente burocrático, definido por la rigidez, altos costos operativos e ineficiencia, un paradigma que predominó hasta la década de 1970. Sin embargo, a partir de la década de 1980, se evidenció una transición hacia una administración más moderna y orientada a resultados, con un enfoque gerencial que prioriza la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos presupuestales, humanos y logísticos. Este cambio permitió atender a un mayor número de ciudadanos y responder de manera más efectiva a las demandas sociales emergentes (Stroińska, 2020).

Con el cambio de siglo, surgieron nuevos enfoques que han transformado la manera de concebir y operar la gestión pública. Entre ellos destacan la gestión colaborativa, la gestión por objetivos, la gestión por resultados y, finalmente, la gestión por procesos. Este último modelo enfatiza la participación activa de todos los actores de la sociedad, promoviendo la solución colectiva a los problemas complejos que enfrentan

los gobiernos. Este enfoque pone al ciudadano en el centro de la política pública, con el propósito de generar alternativas de solución que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también estén orientadas a la creación de valor público sostenible para la ciudadanía (Waardenburg et al., 2020; Petrescu, 2019).

Este recorrido histórico y conceptual demuestra cómo la gestión pública ha evolucionado desde un modelo tradicional hacia enfoques dinámicos y participativos que buscan maximizar el impacto social, integrando principios de eficiencia, inclusión y generación de valor para fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad. Esta evolución refleja la necesidad de un marco adaptativo que responda a las complejidades y desafíos contemporáneos, consolidando un modelo de gestión que promueva el bienestar colectivo y una gobernanza más inclusiva y eficaz.

El concepto de gestión pública ha sido objeto de múltiples aproximaciones teóricas que destacan su carácter dinámico y su orientación hacia la satisfacción de las necesidades sociales. Según Trigo y Álvarez (2017), la gestión pública puede definirse como la capacidad de una institución del sector público para resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos, proporcionando servicios de calidad de manera transparente y efectiva, respondiendo a las demandas sociales con eficiencia y equidad. Por su parte, Osborne et al. (2023) amplían esta noción al referirse a la gestión pública como el conjunto de procesos y herramientas implementadas por las instituciones del Estado para ofrecer servicios públicos de alto desempeño, garantizando así un impacto positivo en la sociedad.

Este enfoque se concreta mediante la implementación sistemática de los elementos esenciales del proceso de gestión. Según Jakobsen y Jensen (2015), dicho proceso incluye la planificación, que define los objetivos y las estrategias para alcanzarlos; la organización, que alinea recursos y actividades de manera estructurada; la dirección, que orienta y motiva las acciones hacia la consecución de las metas propuestas; y el control, que evalúa el cumplimiento de los objetivos y permite realizar ajustes necesarios para optimizar los resultados.

En un contexto contemporáneo caracterizado por una creciente complejidad y demandas ciudadanas en constante evolución, la gestión pública no solo debe centrarse en garantizar la prestación de servicios básicos, sino también en fomentar la participación ciudadana y la generación de valor público. Esto implica incorporar principios de gobernanza colaborativa, transparencia y sostenibilidad en sus procesos, asegurando que las políticas públicas no solo resuelvan problemas inmediatos, sino que también fortalezcan la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.

Por lo tanto, la gestión pública se consolida como un eje fundamental en el diseño y ejecución de políticas públicas efectivas, articulando recursos humanos, financieros y tecnológicos con una visión estratégica que priorice el bienestar colectivo y la transformación social a largo plazo. Este enfoque integral demanda una constante adaptación a las innovaciones y desafíos globales, garantizando que las instituciones públicas sean agentes de cambio, eficiencia y legitimidad en sus respectivas comunidades.

Los enfoques contemporáneos en gestión pública tienen como objetivo principal modernizar la administración de los recursos y servicios públicos, incorporando prácticas exitosas del sector privado en el ámbito gubernamental. Según Lacovino et al. (2017), esta transferencia de estrategias busca optimizar procesos, mejorar la eficiencia y fomentar una mayor orientación hacia resultados en la gestión estatal. Además, el uso de tecnologías emergentes se presenta como un pilar clave para transformar la administración pública, facilitando una gestión más ágil, transparente y centrada en las necesidades de los ciudadanos (Torfing, 2019).

Estas innovaciones no se limitan a contextos específicos, sino que han sido adoptadas y adaptadas en múltiples países, cada uno integrando enfoques y estrategias particulares para mejorar la calidad de los servicios públicos. De Vries y Nemeč (2013), destacan que estas iniciativas buscan generar un impacto positivo en la ciudadanía, promoviendo una administración pública más receptiva y efectiva. En algunos casos, la prioridad se ha centrado en fortalecer el equipamiento y la infraestructura de los sectores

públicos, bajo la premisa de que estas inversiones contribuirán directamente a mejorar la calidad en la prestación de bienes y servicios estatales (Arundel et al., 2019).

Sin embargo, la implementación de estos enfoques plantea desafíos significativos, como la necesidad de adaptar las tecnologías y prácticas del sector privado al contexto público, considerando las particularidades normativas, éticas y sociales que caracterizan a la gestión estatal. Asimismo, es crucial garantizar que estas transformaciones no solo atiendan a criterios de eficiencia, sino que también fortalezcan los principios de equidad, inclusión y sostenibilidad.

En este sentido, la modernización de la gestión pública no debe entenderse como un simple traslado de prácticas privadas al sector público, sino como un proceso reflexivo y estratégico que permita integrar estas herramientas y enfoques dentro de un marco de gobernanza democrática. Esto incluye el diseño de políticas públicas basadas en evidencias, la promoción de la participación ciudadana y la creación de valor público, asegurando que las innovaciones introducidas respondan efectivamente a las complejas y cambiantes necesidades de la sociedad.

Las dimensiones de la gestión pública han sido conceptualizadas por Olías (2021) a través de tres componentes fundamentales, los cuales permiten estructurar y evaluar su funcionamiento desde un enfoque integral. La primera de estas dimensiones es la gestión política, que se centra en la participación activa de los actores de la sociedad civil y las organizaciones en los procesos de formulación del presupuesto participativo. Este enfoque no solo considera la inclusión ciudadana en la planificación, sino que también abarca la ejecución programática de los recursos, garantizando que esta sea eficiente, sostenida, formal, racional, transparente, equitativa y eficaz, con el objetivo último de beneficiar directamente a la población.

Para que este proceso sea efectivo, resulta imprescindible que los gobiernos locales implementen mecanismos que promuevan una participación masiva y significativa de la ciudadanía en espacios de deliberación y toma de decisiones. Esto incluye, por ejemplo, la creación de foros, plataformas digitales y consultas públicas que permitan recoger las opiniones, prioridades y propuestas de diversos sectores sociales.

De este modo, se fomenta una gestión colaborativa que no solo responde a las necesidades específicas de la comunidad, sino que también legitima las decisiones adoptadas por las autoridades locales.

Asimismo, esta dimensión de la gestión política debe estar alineada con los principios éticos y los valores fundamentales de la función pública, tales como la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con el bienestar colectivo. Solo a través de una gestión ética y participativa es posible garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera óptima, atendiendo las demandas sociales más apremiantes y contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales.

Este enfoque, al articular la participación ciudadana con una administración pública eficiente y ética, permite avanzar hacia una gobernanza democrática más sólida, en la que los ciudadanos no solo sean receptores de los servicios públicos, sino también actores activos en la construcción de soluciones a los problemas sociales complejos que enfrentan las comunidades.

La segunda dimensión, identificada como la gestión administrativa, abarca el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizacionales implementados por los funcionarios y servidores públicos dentro de una institución estatal. Este componente se orienta hacia la prestación de servicios eficientes y de calidad, buscando satisfacer las necesidades de la ciudadanía de manera oportuna y efectiva. Según Olías (2021), esta dimensión requiere un enfoque integral que combine el uso óptimo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, con la implementación de prácticas organizacionales que promuevan la innovación, la transparencia y la mejora continua en la administración pública. Además, esta dimensión enfatiza la importancia de desarrollar capacidades institucionales, fortaleciendo la profesionalización y ética de los servidores públicos para garantizar una respuesta adecuada a los desafíos y expectativas ciudadanas.

La tercera dimensión, conocida como la gestión territorial, se centra en la protección, manejo y desarrollo sostenible de los recursos patrimoniales y naturales que

son parte del territorio del Estado. Esto incluye la conservación de recursos ambientales, culturales y arqueológicos, así como la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial que regulen y guíen el uso racional del espacio físico. Olías (2021) destaca que esta dimensión es fundamental para garantizar una administración equilibrada y sostenible de los recursos, asegurando que su explotación o uso beneficie a las generaciones presentes sin comprometer el bienestar de las futuras.

En esta dimensión, se hace indispensable el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria en la gestión del territorio. Esto no solo fomenta la protección del patrimonio natural y cultural, sino que también impulsa el desarrollo socioeconómico a través de la planificación y el uso eficiente del espacio territorial.

La interacción entre estas dimensiones —administrativa y territorial— es crucial para una gestión pública efectiva, ya que permite alinear los recursos organizacionales con las necesidades específicas del territorio y sus habitantes. Al articular estas perspectivas, se promueve un modelo de gobernanza integral y sostenible, capaz de responder a los retos contemporáneos de manera ética, inclusiva y estratégica, fortaleciendo el papel del Estado como garante del bienestar colectivo y la sostenibilidad de su patrimonio territorial.

## **2.2. Gobernanza pública**

La gobernanza pública, como segunda variable del presente estudio, se configura como un eje esencial en la interacción entre el Estado y la ciudadanía, siendo un tema de interés y preocupación constante para los habitantes de cualquier nación. Según Daiyabu et al. (2022), la gobernanza pública implica la adopción de compromisos y la toma de decisiones que fortalecen la gobernabilidad tanto en territorios como en instituciones. Esta dimensión no solo se refiere a la capacidad del Estado para ejercer control y autoridad, sino también a la inclusión de diversos actores sociales en los procesos de

formulación y ejecución de políticas públicas, lo que refuerza la legitimidad y eficacia gubernamental.

Por su parte, Emmendoerfer et al. (2022), destacan que la gobernanza permite la planificación estratégica de actividades en distintas instituciones públicas. Este enfoque fomenta el desarrollo de acciones de gobierno sostenibles, orientadas a atender problemas y necesidades tanto políticas como económicas, con un impacto directo en los actores sociales de un territorio. La planificación estratégica, en este contexto, no solo optimiza la gestión pública, sino que también establece una hoja de ruta clara para la implementación de soluciones integrales y de largo plazo.

Jimbo y Jimbo (2021), amplían esta visión al señalar que la gobernanza pública involucra el uso eficiente de los recursos disponibles en las organizaciones estatales para atender las demandas y reivindicaciones de la ciudadanía. Estas acciones incluyen tanto la mejora en la prestación de servicios públicos como la gestión sostenible de recursos naturales y otros activos bajo la administración institucional. De esta manera, la gobernanza pública no solo responde a necesidades inmediatas, sino que también promueve un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la equidad.

En un contexto más amplio, la gobernanza pública se erige como un proceso dinámico y multifacético que integra principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y sostenibilidad. Estos principios son fundamentales para garantizar que las decisiones adoptadas por las instituciones públicas reflejen las necesidades y expectativas de la población. Además, la gobernanza pública facilita la colaboración interinstitucional y la construcción de alianzas estratégicas con el sector privado y la sociedad civil, contribuyendo a la formulación de políticas públicas más inclusivas y efectivas.

Por lo tanto, la gobernanza pública no solo es un mecanismo para gestionar recursos y responder a demandas ciudadanas, sino también una herramienta clave para fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo que impacte positivamente en el bienestar colectivo. Su importancia radica en su capacidad para articular esfuerzos, coordinar actores y garantizar una

administración pública orientada al servicio de los ciudadanos y a la creación de valor público.

Según Cust et al. (2023), los procesos de gobernanza pública requieren el uso de una comunicación asertiva como elemento esencial para lograr entendimientos efectivos entre las organizaciones públicas y otros actores de la sociedad. Este tipo de comunicación, caracterizada por su claridad, respeto y orientación a resultados, facilita la creación de consensos y la implementación de cambios sustanciales y positivos en la administración pública. La comunicación asertiva no solo mejora la relación entre los diversos agentes involucrados, sino que también contribuye a fortalecer la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

En la misma línea, Voks y Santo (2022), destacan que, para alcanzar un entendimiento óptimo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas, es crucial que las demandas ciudadanas se comuniquen y expongan de manera adecuada. Este proceso demanda que las instituciones estatales asuman un rol de mediación entre los diversos intereses y necesidades de la población, utilizando liderazgos efectivos que fomenten el diálogo y la negociación. En este sentido, el liderazgo institucional debe estar orientado hacia la construcción de puentes entre la ciudadanía y el Estado, promoviendo una participación inclusiva y equitativa en los procesos de toma de decisiones.

Por su parte, Palacios et al. (2021), argumentan que la sostenibilidad de la gobernanza pública depende, en gran medida, de la capacitación continua de los funcionarios y servidores públicos. Esta formación debe enfocarse en el desarrollo de competencias específicas y habilidades de liderazgo que permitan gestionar de manera eficiente los recursos disponibles y responder de forma adecuada a las complejas demandas sociales. La profesionalización del personal público no solo mejora la capacidad operativa de las instituciones, sino que también impulsa la innovación y la adopción de mejores prácticas en la gestión pública.

Ampliando estas perspectivas, la gobernanza pública contemporánea enfrenta el desafío de integrar mecanismos de comunicación efectivos, mediación estratégica y

formación constante en un marco de colaboración interinstitucional. Esto implica no solo establecer canales claros y transparentes de comunicación entre el gobierno y la sociedad, sino también diseñar programas de capacitación alineados con los principios de ética, sostenibilidad y equidad.

La interacción de estos elementos permite que la gobernanza pública trascienda el simple cumplimiento de objetivos administrativos para convertirse en un modelo dinámico y participativo, donde el liderazgo, la comunicación y la formación se combinan para generar cambios significativos en la calidad de vida de los ciudadanos. Este enfoque refuerza el rol del Estado como articulador de soluciones integrales y promotor del desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Yang et al. (2023), argumentan que las divergencias de intereses entre los distintos actores sociales y económicos constituyen un desafío significativo para la gobernanza pública, ya que frecuentemente derivan en conflictos de diversa índole. Estos conflictos, al estar intrínsecamente relacionados con los procesos de gobernanza, demandan un enfoque cuidadoso y la implementación de estrategias específicas que permitan su resolución. La adecuada gestión de estos conflictos es fundamental no solo para garantizar la estabilidad social y económica, sino también para preservar la legitimidad y eficacia de las instituciones públicas en su papel de mediadoras y articuladoras de intereses diversos.

Por su parte, Barandiarán (2021), subraya que el fortalecimiento de la gobernanza pública puede lograrse mediante la incorporación estratégica de la tecnología en los procesos administrativos y de toma de decisiones. Esta integración tecnológica facilita el acceso, manejo y análisis de información relevante, lo que a su vez permite a los tomadores de decisiones contar con herramientas más precisas y efectivas para diseñar e implementar políticas públicas. Además, la tecnología contribuye al desarrollo de liderazgos institucionales más sólidos, que son esenciales para garantizar la cohesión en la ejecución de actividades y procesos, así como para atender de manera óptima las necesidades de la ciudadanía.

En este contexto, la tecnología no solo actúa como un facilitador operativo, sino que también se convierte en un motor para la innovación en la gestión pública. Su correcta implementación permite diseñar sistemas de gobernanza más integrados, donde la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se convierten en pilares fundamentales. Por ejemplo, el uso de plataformas digitales y sistemas de gestión basados en datos puede optimizar la asignación de recursos, reducir la burocracia y promover una mayor interacción entre las instituciones y la sociedad.

Ampliando estas ideas, la gobernanza pública en un entorno contemporáneo enfrenta la dualidad de gestionar conflictos inherentes a la diversidad de intereses y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial transformador de las tecnologías emergentes. Esto implica no solo resolver disputas mediante estrategias participativas y mediación, sino también diseñar un marco normativo y técnico que permita a las instituciones públicas responder con agilidad y eficacia a los retos de la globalización y la digitalización.

En síntesis, se afirma que la gobernanza moderna exige una visión integral que combine la gestión efectiva de conflictos sociales y económicos con la incorporación estratégica de tecnología como catalizador del cambio. Este enfoque no solo fortalece la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población, sino que también promueve un modelo de desarrollo basado en la equidad, la sostenibilidad y la inclusión, alineado con los principios de la buena gobernanza y el desarrollo humano sostenible.

Nioldstad et al. (2023), subrayan que los colaboradores desempeñan un papel fundamental en los procesos de gobernanza pública, ya que su contribución es determinante para alcanzar resultados efectivos que resuelvan los problemas complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas. Los resultados exitosos dependen en gran medida de la capacidad de los actores involucrados para trabajar de manera cohesionada y orientada a objetivos comunes. En este sentido, los problemas asociados a la gobernanza inadecuada se derivan, en parte, de la incapacidad para canalizar las diversas aspiraciones de los actores sociales, lo que genera obstáculos en la implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades colectivas. Este déficit de gobernanza puede traducirse en brechas internas dentro de las instituciones, así como en

desacuerdos entre las partes interesadas, lo que frena el avance hacia soluciones duraderas y consensuadas (Gonçalves & Domingos, 2021).

De manera complementaria, se reconoce que la gobernanza efectiva debe ser un proceso inclusivo que fomente la participación activa de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos. Este enfoque permite que los diversos actores sociales, no solo el Estado, contribuyan con sus propuestas, conocimientos y recursos para la construcción de soluciones sostenibles. La participación ciudadana en la gobernanza se convierte así en un mecanismo clave para identificar las necesidades reales de la población y generar compromisos que aseguren la ejecución de políticas orientadas al bienestar colectivo.

En cuanto al uso de los recursos disponibles, la gestión política y la obligación de informar sobre las actividades institucionales, es imperativo involucrar a todos los actores de un territorio en el proceso de toma de decisiones. Ju et al. (2019) enfatizan que la inclusión de actores locales y regionales en la gestión de recursos no solo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también permite una mayor eficiencia en la asignación de los recursos disponibles, promoviendo un modelo de gobernanza participativa que refleje las necesidades y prioridades de la población. La transparencia en la gestión, junto con una comunicación adecuada sobre las decisiones tomadas, es esencial para generar confianza en las instituciones públicas y asegurar la sostenibilidad de las políticas implementadas.

Ampliando estos puntos, la gobernanza pública contemporánea no solo debe centrarse en la resolución de problemas específicos, sino también en la creación de un marco institucional que favorezca la cohesión social y la colaboración interinstitucional. Este enfoque requiere una visión estratégica que articule los esfuerzos de los distintos actores y fomente una gestión integrada que trascienda las fronteras de las instituciones gubernamentales para incluir a los actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia. En este contexto, la gobernanza se convierte en un proceso continuo de negociación, adaptación y aprendizaje, cuyo objetivo es garantizar una administración pública que no solo responda a las demandas inmediatas, sino que también sea capaz de anticipar y abordar los desafíos a largo plazo de manera equitativa y sostenible.

Según Uyar et al. (2021), la gobernanza se entiende como un proceso continuo y en constante evolución, cuyo objetivo principal es mejorar los espacios públicos para ofrecer a la comunidad mayores oportunidades de participación y facilitar el acceso a servicios y recursos públicos esenciales. Este proceso no se limita únicamente al Estado en su totalidad, sino que se lleva a cabo a través de las instituciones públicas, las cuales, dependiendo de su misión y responsabilidades, deben realizar los procedimientos correspondientes para garantizar la implementación efectiva de la gobernanza. En este contexto, la gobernanza se presenta como un proceso integral que no solo abarca la gestión de los recursos, sino también la capacidad de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, fortaleciendo así los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación inclusiva. Por lo tanto, las instituciones públicas juegan un papel clave, ya que son las encargadas de implementar los mecanismos necesarios para que la gobernanza sea una herramienta eficaz de transformación social y política.

Por su parte, Martin et al. (2023), subrayan que las instituciones del Estado tienen una responsabilidad central en la preservación del orden público, lo que implica la creación de condiciones propicias para el ejercicio del poder político de manera eficiente y con miras al desarrollo económico sostenible. Este enfoque resalta la importancia de las instituciones como los actores clave que permiten la estabilidad política, la gestión adecuada de los recursos y la creación de un ambiente favorable para la inversión y el progreso económico. A medida que las instituciones gestionan eficazmente las políticas públicas y se aseguran de que los recursos sean distribuidos de manera equitativa, también promueven una mayor confianza en las estructuras gubernamentales y favorecen el bienestar general de la población.

Este marco de análisis implica que la gobernanza no debe entenderse solo como la capacidad del Estado para regular y administrar, sino como un proceso participativo y colaborativo que involucra a múltiples actores, desde las instituciones gubernamentales hasta los ciudadanos y las organizaciones sociales. A través de una gobernanza inclusiva, las instituciones pueden no solo garantizar el acceso a servicios y recursos, sino también contribuir a la cohesión social y al fortalecimiento del tejido social. La interacción

constante entre las instituciones públicas y la sociedad es esencial para asegurar que los objetivos de desarrollo sean alcanzados de manera justa y equitativa, minimizando las brechas sociales y promoviendo un desarrollo económico que beneficie a todos los sectores de la población.

Así, la gobernanza pública efectiva requiere la capacidad de las instituciones para gestionar tanto el orden público como los procesos participativos de manera que se fomente un desarrollo económico equilibrado. Este proceso demanda un enfoque holístico que combine la gestión política, la participación ciudadana y la optimización de recursos, para garantizar que los resultados sean sostenibles y reflejen las necesidades de una sociedad diversa y en constante evolución.

Martin et al. (2023), sostienen que incrementar la eficiencia en la gobernanza pública no solo optimiza la gestión de los recursos, sino que también genera un mayor volumen de recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población. Este enfoque, según los autores, posibilita la provisión de mejores servicios públicos y, simultáneamente, crea espacios adecuados para la participación activa de los ciudadanos, permitiéndoles proponer soluciones y colaborar directamente en la resolución de los problemas que enfrentan. Este proceso de participación no solo se limita a la formulación de políticas, sino que también promueve una participación constante y continua, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de incidir en las decisiones que afectan su entorno social, económico y político. Esta sinergia entre gobernanza eficiente y participación activa permite una mayor cohesión social y facilita la creación de políticas públicas más efectivas y ajustadas a las necesidades reales de la comunidad.

Por otro lado, Uyar et al. (2021), destacan que los elementos fundamentales de la gobernanza pública incluyen la transparencia, la participación ciudadana, el desarrollo del gobierno electrónico y el gobierno abierto. Estos elementos son cruciales para garantizar que las acciones del Estado sean tanto accesibles como comprensibles para la ciudadanía, lo que promueve la rendición de cuentas y fortalece la confianza en las instituciones. La transparencia, en particular, es vista como un pilar que asegura que las decisiones gubernamentales se tomen de manera abierta y sin ocultar información relevante,

permitiendo a la ciudadanía estar informada sobre cómo se gestionan los recursos públicos. Además, el gobierno electrónico y el gobierno abierto representan un avance significativo en la utilización de la tecnología para facilitar la gestión pública digitalizada, lo que optimiza la administración de los recursos y mejora el acceso a los servicios para los ciudadanos. Estos componentes, cuando se implementan de manera adecuada, no solo mejoran la eficiencia administrativa, sino que también permiten una mayor interacción y colaboración entre los ciudadanos y el gobierno.

Cota (2018) agrega a estos elementos fundamentales el liderazgo, considerándolo como un mecanismo esencial para fortalecer la gobernanza. El liderazgo, desde esta perspectiva, es clave para generar confianza y cohesión entre los actores gubernamentales y los ciudadanos, promoviendo la creación de espacios de diálogo y entornos colaborativos que faciliten la toma de decisiones conjuntas. A través de un liderazgo efectivo, las instituciones públicas pueden coordinar mejor los esfuerzos entre diferentes actores sociales, políticos y económicos, y crear un marco de colaboración y consenso que permita abordar de manera más eficiente los problemas públicos. Este tipo de liderazgo, que se fundamenta en principios de equidad, transparencia y compromiso social, es esencial para garantizar que la gobernanza sea inclusiva y se enfoque en la resolución de los problemas sociales de manera colectiva.

En resumen, los elementos clave de la gobernanza pública —transparencia, participación ciudadana, gobierno electrónico y abierto, y liderazgo— se interrelacionan de manera que no solo fortalecen la capacidad del Estado para gestionar los recursos de manera más eficiente, sino que también promueven la inclusión y la colaboración activa de la ciudadanía. Este enfoque, orientado hacia una gestión pública más participativa y colaborativa, permite el diseño e implementación de políticas públicas más efectivas, adaptadas a las necesidades de la sociedad, y construidas sobre la base de un diálogo continuo y constructivo entre el gobierno y la ciudadanía.

Las dimensiones que se han considerado para analizar la gobernanza pública incluyen varios aspectos clave que son esenciales para garantizar su efectividad. En primer lugar, se destaca el control de la corrupción, un componente fundamental para

asegurar la integridad y la transparencia en la gestión pública. En este sentido, Daiyabu et al. (2022), consideran que la prevención y control de la corrupción debe ser un proceso sistemático y continuo, mediante el cual se establezcan mecanismos de medición y supervisión rigurosos para cada acción realizada por las personas o áreas encargadas de las adquisiciones de bienes y servicios con recursos públicos. Esta supervisión debe garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, sin ser desviados por prácticas corruptas. Según los autores, solo a través de un control efectivo y transparente se puede evitar que la corrupción se infiltre en el proceso de gestión pública, lo cual sería perjudicial tanto para la confianza ciudadana como para el desarrollo económico.

Por su parte, Mayol (2020), sostiene que la corrupción no solo es una práctica inmoral, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo económico de un país. La corrupción, al desviar recursos destinados al bienestar público, limita la capacidad del gobierno para realizar inversiones adecuadas en infraestructuras, servicios y proyectos de desarrollo que beneficien a la sociedad. En este sentido, la corrupción actúa como un obstáculo significativo para el desarrollo sostenible, ya que impide la asignación eficiente de recursos y genera desigualdades económicas y sociales. Así, el control de la corrupción no solo se convierte en una cuestión ética, sino también en una necesidad económica para el progreso de cualquier nación. El fortalecimiento de las instituciones de control y la implementación de normativas anticorrupción son pasos cruciales para erradicar esta práctica y promover una gestión pública basada en la transparencia y la rendición de cuentas.

En la misma línea, Rocha y Rover (2019) subrayan que uno de los principios fundamentales del Estado es mantener los niveles de corrupción en cero, lo que implica la implementación de un marco institucional que asegure la correcta ejecución de los proyectos de desarrollo para la población. Según estos autores, la corrupción socava la efectividad de los proyectos públicos, ya que desvía los recursos destinados al bienestar social, comprometiendo la calidad de los servicios públicos y la infraestructura. De acuerdo con esta perspectiva, un Estado que logra mantener un control riguroso sobre la corrupción tiene mayores posibilidades de implementar proyectos de desarrollo de

manera eficiente, garantizando que los recursos lleguen realmente a la población y contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

En conclusión, el control de la corrupción es un pilar esencial para el fortalecimiento de la gobernanza pública. La transparencia y el control riguroso de los procesos de gestión pública no solo son necesarios para evitar el desvío de recursos, sino también para asegurar que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo de manera efectiva, con un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo económico del país. La implementación de estrategias anticorrupción eficaces debe ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno que busque fortalecer su gobernanza y garantizar una administración pública responsable y orientada al bienestar colectivo.

La efectividad del gobierno constituye una dimensión clave dentro de la gobernanza pública, pues está relacionada directamente con la capacidad de las instituciones estatales para implementar políticas y proyectos que impulsen el desarrollo de un país. En este sentido, Daiyabu et al. (2022) definen la efectividad gubernamental como el nivel de eficiencia con el que las instituciones públicas ejecutan los planes y programas destinados a alcanzar altos niveles de desarrollo. Para estos autores, una gestión eficaz no solo se mide en términos de la ejecución de actividades, sino en la capacidad de dichas instituciones para optimizar el uso de los recursos y cumplir con los objetivos establecidos, alcanzando resultados que se traduzcan en un bienestar tangible para la ciudadanía.

Cota (2018) expande esta visión al sostener que la efectividad gubernamental depende esencialmente de la gestión adecuada de los recursos públicos, que deben ser orientados a promover el desarrollo. En este contexto, la gestión estratégica de los recursos no solo implica una correcta asignación de los mismos, sino también su monitoreo continuo, la evaluación de resultados y la capacidad de las instituciones para ajustar las políticas conforme a las necesidades cambiantes de la sociedad. Cota subraya que la eficiencia en la gestión de recursos es un factor determinante en la capacidad del gobierno para responder a los desafíos sociales y económicos, garantizando un desarrollo sostenible que beneficie a la población a largo plazo.

Por otro lado, Zuiderwij et al. (2021), abordan la efectividad del gobierno desde la perspectiva de los proyectos de inversión pública, particularmente aquellos orientados a mejorar los servicios públicos. Los autores destacan que estos proyectos deben ejecutarse con altos estándares de efectividad, lo que implica no solo cumplir con los objetivos iniciales, sino también maximizar el impacto social y económico. La implementación de proyectos de infraestructura, servicios de salud, educación y otros, debe llevarse a cabo de forma que se garantice su sostenibilidad y acceso universal, asegurando que los beneficios lleguen de manera equitativa a toda la población. La efectividad de estos proyectos, en última instancia, se refleja en la mejora tangible de la calidad de vida de los ciudadanos y en el impulso del desarrollo económico local y nacional.

En una línea similar, Cerrillo (2018), subraya que el rol del Estado en la efectividad gubernamental va más allá de la ejecución de políticas y proyectos: el Estado debe ser el garante de las gestiones necesarias para asegurar el desarrollo integral de la población. Este enfoque implica que el gobierno no solo se encargue de la implementación de políticas públicas, sino que también se comprometa a asegurar que dichas políticas se dirijan hacia la reducción de desigualdades, la inclusión social y el empoderamiento de los ciudadanos. Según Cerrillo, la efectividad del gobierno también depende de la capacidad del Estado para establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y de gobernanza participativa, que permitan la co-creación de políticas públicas con la sociedad civil, garantizando que las políticas respondan a las necesidades reales de la población.

En ese sentido, la efectividad del gobierno es un aspecto crucial para lograr el desarrollo sostenido y el bienestar de la población. Implica una gestión eficiente de los recursos, la ejecución efectiva de proyectos de inversión pública, y la capacidad del Estado para garantizar que las políticas públicas estén alineadas con los intereses y necesidades de los ciudadanos. Para ello, es esencial una planificación estratégica, la implementación de mecanismos de control y evaluación, y la participación activa de la

sociedad en la toma de decisiones, asegurando que los objetivos de desarrollo se alcancen de manera eficiente y equitativa.

La estabilidad política constituye una dimensión crucial dentro del marco de la gobernanza pública, ya que es un elemento que asegura la continuidad y efectividad de las políticas del Estado. Según Daiyabu et al. (2022), la estabilidad política se entiende como un conjunto de políticas públicas emanadas desde el gobierno que favorecen el funcionamiento adecuado de la nación. Esta estabilidad no solo se refiere a la paz política interna, sino también a la capacidad del Estado para promover el crecimiento económico sostenible y proteger al país de posibles crisis políticas, sociales o económicas, tanto internas como externas. En este sentido, la estabilidad política es vista como un pilar fundamental para asegurar un entorno en el que los actores sociales, económicos y políticos puedan desarrollarse sin sobresaltos, generando confianza tanto en los ciudadanos como en los inversionistas nacionales e internacionales.

Cota (2018), enfatiza que, para alcanzar esta estabilidad, es crucial la implementación de políticas públicas que prevengan los desequilibrios económicos dentro de un país. Dichos desequilibrios, si no se gestionan adecuadamente, pueden desembocar en problemáticas sociales graves, como el aumento de la pobreza, las desigualdades y el malestar social, lo que comprometería la paz y la cohesión social. Así, el autor subraya que la gestión macroeconómica adecuada es esencial no solo para mantener el crecimiento económico, sino también para preservar el orden social, evitando que las crisis económicas desencadenen disturbios que afecten la estabilidad política.

Mayol (2020) también resalta que una de las principales características del Estado debe ser su capacidad para garantizar un desarrollo económico sostenido. Las políticas públicas desempeñan un papel decisivo en este sentido, pues deben ser diseñadas no solo para superar los problemas económicos inmediatos, sino también para eliminar las causas estructurales de los problemas que podrían surgir a largo plazo. En este contexto, la estabilidad política no solo es el resultado de la ausencia de conflictos, sino también de estrategias proactivas que permitan a las instituciones públicas gestionar adecuadamente

los ciclos económicos y anticipar posibles turbulencias que podrían desestabilizar el entorno político y social.

Por su parte, Uyar et al. (2021), subrayan que la estabilidad política no es un fenómeno aislado, sino que debe emanar directamente de las instituciones públicas que, en su calidad de garantes del orden y el bienestar general, juegan un rol central en la consolidación de la gobernanza. Estas instituciones no solo deben actuar como mediadoras entre los diferentes sectores de la sociedad, sino también como actores clave en la implementación de políticas públicas orientadas a la creación de un entorno político estable. De acuerdo con estos autores, la estabilidad política no puede ser únicamente el resultado de la ausencia de conflictos, sino que debe ser el producto de la interacción y cooperación efectiva entre las diferentes ramas del poder, el sector privado y la sociedad civil.

Por lo tanto, la estabilidad política no solo es una condición necesaria para la gobernanza efectiva, sino también un factor determinante para el desarrollo económico y social sostenible de un país. Su sostenibilidad depende de la implementación de políticas públicas eficaces que promuevan el equilibrio económico, la cohesión social y la resiliencia ante crisis internas y externas. Para ello, es fundamental que las instituciones públicas jueguen un papel activo y proactivo en la gestión de los desafíos políticos, sociales y económicos, asegurando que las decisiones políticas sean equitativas, inclusivas y orientadas al bienestar general.

La calidad regulatoria constituye una dimensión esencial dentro del ámbito de la gobernanza pública, ya que está estrechamente relacionada con la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos y los mecanismos de regulación en el sector público. Según Daiyabu et al. (2022), la calidad regulatoria puede definirse como la capacidad de las entidades estatales para medir y optimizar la eficiencia en los procedimientos que regulan diversas actividades dentro de las instituciones públicas. Esta regulación no solo debe ser eficiente, sino también transparente, lo que implica que los procesos sean claros y accesibles tanto para los ciudadanos como para los funcionarios encargados de su implementación. Una regulación de calidad garantiza que los trámites y

procedimientos se realicen de manera oportuna y conforme a las normas establecidas, reduciendo la burocracia innecesaria y fomentando una cultura de cumplimiento y confianza entre el gobierno y la sociedad.

Martin et al. (2023), enfatizan que la calidad regulatoria no solo es un mecanismo para asegurar la eficiencia administrativa, sino que también juega un papel crucial en la mejora del bienestar general de la ciudadanía. Una regulación bien estructurada permite la creación de un entorno propicio para el desarrollo económico, social y cultural, asegurando que los servicios públicos sean prestados de manera efectiva y equitativa. Además, una regulación eficiente facilita el acceso de la población a los servicios básicos, reduciendo las desigualdades y promoviendo la inclusión social, aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la cohesión social en una nación.

Por otro lado, Uyar et al. (2021), sostienen que, para impulsar el desarrollo sostenible, es necesario implementar estrategias regulatorias claras que permitan una adecuada asignación y uso de los recursos. Estas estrategias deben basarse en normativas precisas que guíen tanto la acción pública como la interacción con el sector privado y la sociedad civil. Las reglas claras son fundamentales para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima y que los proyectos de inversión pública se desarrollen sin obstrucciones legales o administrativas. Este enfoque regulatorio no solo optimiza el uso de los recursos, sino que también contribuye a la creación de un entorno de confianza y previsibilidad que favorezca la inversión y el desarrollo a largo plazo.

Asimismo, Martin et al. (2023) subrayan que el rol del Estado en la garantía de la normativa adecuada es fundamental para asegurar la implementación exitosa de los proyectos de inversión. Las normas claras y eficaces permiten que los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, se ejecuten de manera eficiente, garantizando la calidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Una calidad regulatoria adecuada también fortalece las instituciones al asegurar que los procedimientos se sigan con transparencia y que los mecanismos de rendición de cuentas estén debidamente establecidos.

Entonces, la calidad regulatoria es una dimensión clave para asegurar no solo la eficiencia administrativa, sino también la justicia social y el desarrollo sostenible. Una regulación eficaz permite mejorar la gestión de los recursos, optimizar los servicios públicos y garantizar la participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Además, establece las bases para un entorno económico y social más estable, propicio para el crecimiento y el bienestar general, lo que contribuye a la consolidación de una gobernanza pública efectiva y transparente.

La quinta dimensión de la gobernanza pública, el imperio de la ley, se refiere a la capacidad de un Estado para hacer cumplir las normas jurídicas y reglamentarias que regulan las relaciones sociales, económicas y políticas dentro de un territorio. Según Daiyabu et al. (2022), el imperio de la ley es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de la sociedad, ya que asegura que todos los miembros de la comunidad estén sujetos a un mismo marco normativo, lo cual es esencial para el mantenimiento de la justicia y la equidad. La implementación y cumplimiento efectivo de las leyes permiten la consolidación de un orden social estable, donde los derechos y deberes de los ciudadanos son respetados y las instituciones operan dentro de los límites establecidos por el orden jurídico.

Cerrillo (2018), sostiene que, a través de las normas legales, se implementan las acciones necesarias para llevar a cabo decisiones que aseguren la transparencia y la equidad en los procesos gubernamentales. En este sentido, las leyes no solo regulan la conducta de los ciudadanos, sino que también proporcionan un marco para la toma de decisiones públicas que sean justas y accesibles para toda la población, independientemente de su estatus social o económico. La existencia de un sistema legal robusto y accesible permite que las decisiones del gobierno se lleven a cabo de manera coherente con los principios de igualdad y no discriminación, promoviendo así la confianza y el compromiso ciudadano hacia las instituciones públicas.

En una línea similar, Rocha & Rover (2019) enfatizan que el imperio de la ley es un factor imprescindible para la gobernanza pública, pues garantiza que las normas y reglamentos sean cumplidos de manera obligatoria, sin excepciones. Este principio no

solo establece la obligatoriedad de las leyes, sino que también refuerza la credibilidad del sistema judicial y de las instituciones del Estado. Cuando las leyes se aplican de manera consistente y sin sesgos, se fomenta un entorno en el que los ciudadanos pueden confiar en que sus derechos serán respetados y sus intereses protegidos.

Además, el imperio de la ley se erige como una herramienta clave para la resolución de conflictos, la prevención de abusos de poder y la protección de la propiedad y los derechos fundamentales. La efectividad en la aplicación de la ley es, por tanto, un pilar esencial para el funcionamiento de la gobernanza democrática, pues asegura que todas las acciones del gobierno y de los actores sociales se desarrollen dentro de un marco de legalidad que garantice el respeto a los derechos humanos y la equidad.

Sintetizando se afirma que el imperio de la ley no solo implica la existencia de un sistema normativo, sino también su aplicación efectiva y coherente, que sea capaz de garantizar la justicia, promover la equidad y fomentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Esta dimensión es crucial para la consolidación de una gobernanza pública estable, en la que el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos fundamentales se conviertan en el fundamento de una sociedad justa, participativa y respetuosa del Estado de derecho.

La sexta dimensión de la gobernanza pública, la voz y responsabilidad, es un concepto clave que implica tanto la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones sobre las decisiones gubernamentales, como la obligación de las instituciones públicas de ser responsables ante la sociedad por sus acciones y políticas. Según Daiyabu et al. (2022), esta dimensión abarca las acciones necesarias para garantizar que el gobierno cumpla eficazmente con sus mandatos y compromisos con la ciudadanía, promoviendo así un progreso sostenible que responda a las necesidades y expectativas de la población. En otras palabras, se refiere al proceso de rendición de cuentas en el que tanto las autoridades públicas como los ciudadanos tienen un papel activo: los primeros, asumiendo su responsabilidad en la ejecución de políticas públicas; los segundos, expresando sus opiniones, evaluando el impacto de dichas políticas y exigiendo transparencia y eficacia.

En este sentido, Martin et al. (2023), argumentan que la voz y responsabilidad representan un instrumento fundamental para la participación activa de la población en el proceso democrático, permitiendo que los ciudadanos no solo sean receptores de las decisiones del gobierno, sino también actores en la formulación y evaluación de políticas. La voz de la ciudadanía se expresa a través de diferentes mecanismos de participación, tales como consultas públicas, audiencias, peticiones y otros espacios formales e informales que permiten que las instituciones públicas tomen en cuenta las necesidades y preocupaciones de la población. Al mismo tiempo, la responsabilidad implica que los servidores públicos estén comprometidos a rendir cuentas sobre los resultados de sus decisiones y la correcta utilización de los recursos, asegurando que sus acciones se alineen con los principios de transparencia, ética y eficiencia.

La voz y responsabilidad son, por tanto, elementos que refuerzan la democracia participativa y el empoderamiento ciudadano. Estas acciones no solo promueven la participación activa de los ciudadanos en el proceso de gobernanza, sino que también establecen un sistema de feedback continuo, donde las políticas públicas pueden ser ajustadas según las opiniones y necesidades de los ciudadanos. Este ciclo de participación y rendición de cuentas mejora la legitimidad de las instituciones públicas, fortaleciendo la confianza social en el gobierno y asegurando que las políticas públicas sean realmente representativas y efectivas en la resolución de los problemas sociales.

Por otro lado, la responsabilidad también aboga por una gestión pública eficiente, en la que se prevé que las autoridades no solo implementen decisiones con base en las demandas sociales, sino que también respondan de manera clara y contundente a las consecuencias de sus acciones. Esta dimensión fomenta la justicia social al garantizar que todos los actores, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a un entorno donde su voz sea escuchada y donde los responsables de la gestión pública sean directamente responsables ante la sociedad.

Siendo entonces que la voz y responsabilidad en la gobernanza pública se constituyen como una dimensión fundamental para la construcción de un Estado democrático y eficaz. Facilitan la participación activa de la ciudadanía en los procesos de

toma de decisiones y aseguran que las instituciones públicas mantengan un compromiso de rendición de cuentas ante la población. Esta dimensión promueve una relación más cercana y equitativa entre los gobernantes y los gobernados, contribuyendo a una gobernanza más inclusiva, transparente y responsable.

### **2.3. Relación de la gestión con la gobernanza pública**

Diversos investigadores han abordado el estudio de la relación de estas variables. Entre ellos se puede mencionar a Devisscher et al. (2022), los que realizaron un estudio con el objetivo de medir la gestión y gobernanza de los bosques urbanos en América Latina y el Caribe. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, con recolección de datos en un solo momento, es decir, de manera transversal. Participaron 91 encuestados provenientes de 50 ciudades, lo que permitió obtener una muestra representativa. Los datos recopilados fueron procesados y analizados mediante la Prueba t de Welch de dos muestras, una herramienta estadística que permitió comparar las diferencias entre las variables estudiadas. Los resultados obtenidos indican que tanto la gestión como la gobernanza de los bosques urbanos están positivamente relacionadas, y ambas contribuyen de manera significativa al manejo adecuado y sostenible de estos recursos en las ciudades, destacando la relevancia de los gobiernos locales en este proceso.

Yirga Ayele et al. (2022), llevaron a cabo un estudio sobre la gestión y gobernanza de parques urbanos en Etiopía, ubicada en el extremo oriental de África. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, utilizando un corte transversal para la recolección de datos. Se encuestaron a 90 actores locales claves vinculados al manejo de estos parques, y se empleó estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos. Los resultados revelaron que la gobernanza y la gestión están estrechamente relacionadas en la administración efectiva de los parques urbanos. En consecuencia, los autores sugieren la implementación de gestiones a largo plazo para los espacios públicos y la integración de un enfoque estratégico en su gestión, destacando la

importancia de un modelo participativo que involucre tanto a la organización como a los usuarios en el proceso de gobernanza.

Kurniawan (2021), examinó cómo la buena gobernanza se relaciona con la gestión pública de los recursos financieros en los gobiernos locales de Indonesia. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, recopilando datos mediante encuestas aplicadas a 39 líderes de gobiernos locales en un único momento, quienes respondieron un cuestionario estructurado. Para evaluar las hipótesis planteadas, se utilizó el método de regresión múltiple en el análisis de los datos. Los hallazgos revelaron una conexión significativa entre la gobernanza y la gestión pública en los gobiernos locales, evidenciando que ambas desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento del rendimiento gubernamental, lo que resulta en una mejor optimización de los recursos y una mayor eficacia en la administración local.

Castanho et al. (2020), exploraron la conexión entre la gobernanza y la gestión pública en el sector turístico de Portugal. La investigación empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, recopilando datos en un único momento y analizándolos mediante técnicas de estadística descriptiva. Los resultados indicaron una relación sólida entre la gobernanza y la gestión pública, mostrando un impacto positivo en áreas clave de la gestión turística, como la administración de alojamientos, recursos naturales, elementos culturales y servicios de alquiler. Los autores destacan la importancia de abordar estos aspectos desde una perspectiva de gobernanza para alcanzar una gestión turística más eficiente y sostenible.

Oliveira y Vieira (2019), llevaron a cabo una investigación para analizar la conexión entre la gobernanza pública y la gestión pública en Brasil. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo, recolectando información de 372 entidades públicas mediante un cuestionario. Los datos recopilados fueron procesados utilizando técnicas de estadística descriptiva. Los hallazgos evidenciaron una relación positiva entre la gobernanza y la gestión pública; sin embargo, señalaron que los niveles de gobernanza aún no han alcanzado la madurez necesaria, lo cual limita la obtención de resultados óptimos en la administración de las organizaciones públicas. A pesar de ello, el estudio

concluyó que se están generando avances iniciales hacia una mayor consolidación de la gobernanza, lo que promete mejoras significativas en los resultados de la gestión pública.

Salas (2020) propuso un modelo de gestión fundamentado en el enfoque de gobernanza pública, orientado a los gobiernos locales de la Región San Martín. El estudio utilizó una metodología cuantitativa de tipo aplicada, involucrando a 14 municipalidades y trabajando con una muestra final de 7 gobiernos locales. Los resultados mostraron que el 95.2% de los participantes calificaron la gestión municipal como eficiente, mientras que el 76.2% otorgó una valoración positiva a la gobernanza. Además, se encontró una correlación de 0.914 entre ambas variables, lo que refleja una relación positiva y significativa. En conclusión, el estudio destaca que una gestión municipal de alta calidad es clave para mejorar los niveles de gobernanza en los gobiernos locales.

Campos (2019), llevó a cabo un estudio con el propósito de diseñar un modelo de gobernanza orientado a optimizar la gestión de una cuenca hidrográfica en Lambayeque. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y aplicado, recabando información mediante encuestas dirigidas a instituciones y personas involucradas en la gestión de la cuenca. Para ello, se utilizó un cuestionario compuesto por 119 ítems. Los resultados indicaron que el 66,7% de los encuestados perciben la existencia de una gobernanza participativa, mientras que únicamente el 15,4% considera que la gestión de la cuenca es adecuada. Como conclusión, el estudio determinó que la adopción de un enfoque basado en la gobernanza podría generar un impacto positivo en la gestión de la cuenca, promoviendo un uso más eficiente de los recursos hídricos en beneficio de la población local.

Bedón (2022), llevó a cabo un estudio para evaluar la relación entre la gobernanza y la gestión del Parque Nacional del Huascarán, ubicado en Ancash. La investigación utilizó una metodología cuantitativa con un diseño no experimental, recopilando datos de manera transversal a través de un cuestionario con escala Likert, aplicado a 36 funcionarios. Los resultados mostraron que el 55,6% de los participantes perciben que la gobernanza se implementa de forma adecuada en la gestión de los recursos turísticos naturales, mientras que el 38,9% considera que la gestión de estos recursos es

satisfactoria. Asimismo, se identificó una fuerte correlación entre ambas variables, destacando la relevancia de una gestión eficiente para mejorar los niveles de gobernanza en este contexto.

Yanqui (2023), realizó un estudio para investigar la relación entre la gestión pública y la gobernanza del ordenamiento territorial en Carabaya, Puno. El trabajo utilizó un enfoque cuantitativo de carácter básico, con un diseño correlacional no experimental y de corte transversal. Se aplicaron encuestas a 56 habitantes vinculados a la gestión territorial de la provincia, y los datos recolectados fueron analizados con el software SPSS utilizando la prueba de Spearman para evaluar las relaciones entre las variables. Los resultados mostraron una asociación de 0,393, lo que indica una relación positiva entre la gestión pública y la gobernanza territorial. En conclusión, se evidenció que la gestión pública tiene una influencia significativa en la gobernanza del territorio dentro del contexto analizado.

Casique (2023), realizó un estudio correlacional para examinar la relación entre la gobernanza y la gestión de las competencias verdes en Moyobamba, San Martín. La investigación, de enfoque cuantitativo y carácter básico, contó con una muestra de 60 trabajadores. Los resultados mostraron que el 55% de los participantes calificaron la gobernanza como de nivel medio, mientras que el 47% opinaron que la gestión de las competencias verdes también se encontraba en un nivel medio. La relación entre ambas variables fue de 0,691, lo que sugiere una correlación positiva significativa. En conclusión, el estudio subraya la relevancia de la gobernanza para optimizar la gestión de las competencias verdes en la región amazónica de Perú.

El propósito principal de la investigación fue determinar la influencia de gestión en la gobernanza pública en los gobiernos locales de Perú. Este estudio busca comprender cómo la eficacia en la gestión pública se interrelaciona con los principios de gobernanza, contribuyendo a la mejora de los resultados en la administración pública a nivel local. Al centrarse en los gobiernos locales, la investigación pretende arrojar evidencia sobre cómo las prácticas de gobernanza inciden en el desempeño organizacional y en la satisfacción

de las necesidades de la ciudadanía, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades institucionales en estos niveles gubernamentales.

Asimismo, a partir del análisis exhaustivo de la literatura existente, se han formulado las siguientes hipótesis, con el objetivo de profundizar en la comprensión de las relaciones entre las variables de estudio. Estas hipótesis buscan guiar la investigación hacia la identificación de patrones y conexiones significativas, contribuyendo a la validación o refutación de los marcos teóricos previamente establecidos en el contexto de la gobernanza y la gestión pública:

H1: La gestión pública influye significativamente en la gobernanza pública en gobiernos locales peruanos.

H2: La gestión pública influye significativamente en el control de la corrupción en gobiernos locales peruanos.

H3: La gestión pública influye significativamente en la efectividad de gobierno en los municipios peruanos.

H4: La gestión pública influye significativamente en la estabilidad política en gobiernos locales peruanos.

H5: La gestión pública influye significativamente en la calidad regulatoria en gobiernos locales peruanos.

H6: La gestión pública influye significativamente en el imperio de la Ley en gobiernos locales peruanos.

H7: La gestión pública influye significativamente en la voz y responsabilidad en gobiernos locales peruanos.

# Capítulo III

METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO

---

### **3.1. METODOLOGÍA**

En función del objetivo de estudio, este se clasificó como una investigación básica, dado que su principal propósito es contribuir al aumento del conocimiento existente sobre la relación entre las variables en estudio (Gallardo, 2018). Es decir, busca expandir la comprensión de la gestión pública y su vinculación con la gobernanza pública, particularmente en el contexto de los gobiernos locales.

La investigación se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo, siguiendo procedimientos sistemáticos y bien definidos. El proceso comenzó con la identificación del problema, la revisión de la base teórica relevante y el planteamiento de hipótesis, las cuales fueron evaluadas mediante datos recolectados del entorno de estudio. En otras palabras, partiendo de conceptos teóricos, se formularon hipótesis, cuya veracidad se evaluó mediante la estimación de magnitudes y la correlación de la gestión pública con la gobernanza (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

El diseño de la investigación fue no experimental, dado que no fue necesario manipular las variables, sino más bien medirlas y establecer las relaciones pertinentes (Arias, 2020). Además, al tratarse de una recolección de datos en un único momento, se adoptó un enfoque transversal (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Finalmente, se optó por un diseño explicativo, ya que el propósito fue medir la influencia de la variable gestión pública en la gobernanza pública y las dimensiones de esta última (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

### **3.2. Población y muestra**

La investigación realizada permite la generalización de los resultados a una población específica, lo que constituye una característica fundamental en el proceso de generación de conocimiento. Desde esta perspectiva, se entiende al municipio como una entidad conformada por un grupo de trabajadores que poseen características comunes y que comparten ciertos rasgos identificables. Este grupo de trabajadores, ya sea finito o infinito, es sobre el cual se debe extrapolar los hallazgos obtenidos en el estudio,

limitando la generalización a la población definida en función del problema y los objetivos planteados (Arias, 2020).

En el contexto de este estudio, se definió como población a los trabajadores de los gobiernos locales ubicados en el centro de Perú. Los criterios de inclusión contemplaron a trabajadores nombrados o contratados de municipalidades, aquellos con más de seis meses de antigüedad en la institución y desempeñando labores administrativas y de gestión. Por otro lado, los criterios de exclusión se aplicaron a trabajadores jubilados, con licencia, en contratos esporádicos, con labores de carácter obrero o con contratos por servicios. Estos criterios aseguran que la muestra sea representativa de los trabajadores con un vínculo estable y directo con las funciones de gestión pública, asegurando la relevancia y validez de los resultados obtenidos.

## **Muestra**

Para el presente estudio, se empleó una muestra no probabilística por conveniencia, seleccionando a aquellos trabajadores que decidieron participar de manera voluntaria en el proceso de investigación (Gallardo, 2018). Este enfoque se adoptó debido a su viabilidad y accesibilidad dentro del contexto específico de la investigación. El muestreo por conveniencia es un método ampliamente aceptado en la investigación científica, especialmente cuando las condiciones logísticas o los recursos disponibles limitan la capacidad de realizar un muestreo aleatorio más estricto (Gallardo, 2018). Aunque este tipo de muestreo no garantiza la representatividad de la población en su totalidad, permite acceder a una muestra accesible y adecuada para la obtención de datos, siempre que se reconozcan las limitaciones inherentes en términos de generalización de los resultados.

La muestra definitiva estuvo conformada por un total de 345 participantes, quienes fueron seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos previamente para el estudio. Este número de participantes fue considerado adecuado para garantizar la obtención de datos representativos dentro del contexto delimitado de la investigación, permitiendo así la evaluación de las relaciones entre las variables de gestión pública y

gobernanza en los gobiernos locales. La elección de la muestra se fundamentó en los principios metodológicos del muestreo por conveniencia, lo cual facilitó la recopilación de información de manera eficiente y acorde con los objetivos planteados en la investigación.

### **3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos**

Considerando el tipo, diseño, enfoque y nivel de estudio adoptados en la investigación, se optó por emplear la técnica de encuesta para la recolección de datos. Esta metodología es especialmente adecuada para obtener información cuantitativa sobre las variables de gestión pública y gobernanza pública en los gobiernos locales. De acuerdo con Feria et al. (2020), la encuesta se presenta como un procedimiento altamente eficiente en estudios de carácter cuantitativo, ya que se aplica directamente a los participantes. Su simplicidad en la ejecución y la capacidad de generar datos accesibles y fácilmente manejables hacen de la encuesta una herramienta fundamental para la obtención de información precisa, permitiendo al investigador realizar un análisis exhaustivo y detallado de las variables en cuestión. Esta técnica, al ser aplicada de manera sistemática, facilita la identificación de patrones y relaciones entre las variables bajo estudio.

De acuerdo con Ramos et al. (2019), la herramienta más adecuada para el procedimiento de recolección de datos seleccionado es el cuestionario, que se caracteriza por ser un formulario compuesto por una serie de ítems con opciones de respuesta múltiple. En este formato, el encuestado tiene la posibilidad de elegir la respuesta que considera más adecuada en relación con la proposición presentada. Este instrumento es generalmente completado directamente por el participante y facilita la obtención de información ordenada y sistemática sobre sus percepciones respecto a las variables que se están evaluando.

En el contexto de la presente investigación, se utilizó un cuestionario con una escala tipo Likert, la cual constaba de cinco alternativas de respuesta, que iban desde 1= "muy deficiente" hasta 5= "excelente" (Arribas, 2004). El cuestionario fue diseñado con

base en una serie de ítems que los participantes debían leer y completar en función de sus percepciones (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). El cuestionario se estructuró en dos partes: la primera, orientada a medir la variable "gestión pública", que se subdividió en tres dimensiones y un total de 15 ítems. La segunda parte se dedicó a la medición de la variable "gobernanza pública", la cual abarca seis dimensiones y un total de 16 ítems, proporcionando una evaluación integral de la relación entre ambas variables.

El instrumento utilizado en este estudio fue validado por un panel de cinco expertos con amplia experiencia en el ámbito de la gestión pública. Estos especialistas realizaron una revisión exhaustiva del instrumento, sugiriendo modificaciones y ajustes que optimizaran su claridad y pertinencia. Tras incorporar las recomendaciones pertinentes, los expertos otorgaron su aprobación para la aplicación del cuestionario, asegurando su adecuación para los objetivos de la investigación.

**Tabla 1**  
*Instrumento utilizado para la recolección de datos*

Variable	Dimensión	Ítem
Gestión pública	Gestión política	Los habitantes y las organizaciones del distrito participan de manera activa en los talleres relacionados con el presupuesto participativo. Durante la fase de elaboración del presupuesto participativo, se aplican de manera correcta las etapas y los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
	Gestión administrativa	La institución cuenta con mecanismos que le permiten administrar de manera adecuada el presupuesto participativo. La institución maneja de manera eficaz la gestión de sus recursos ambientales para el beneficio de la comunidad. La gestión municipal aplica de manera efectiva sus herramientas de gestión, presupuesto y logística institucional para promover el desarrollo local. Considera que la institución dispone de una estructura y herramientas apropiadas para ofrecer bienes y servicios públicos de manera oportuna y de calidad. A nivel institucional, se considera que existen mecanismos, estrategias y acciones que posibilitan al personal ofrecer una atención eficaz a los ciudadanos. Diga Usted si a nivel de su institución existe un modelo

		<p>de trabajo coordinado y colaborativo a nivel del personal.</p> <p>Goza de la confianza institucional, que le permita trabajar diligentemente en la atención oportuna de servicios en beneficio del público usuario.</p> <p>Según su percepción, la población cree y confía en el trabajo diligente e integridad de la autoridad y trabajadores públicos de su institución.</p> <p>La institución dispone de un inventario del patrimonio cultural, arqueológico y ambiental del territorio.</p> <p>La institución dispone de herramientas (planes, programas) que le permiten gestionar de manera adecuada sus recursos naturales, ambientales y su patrimonio cultural y arqueológico.</p>
	Gestión territorial	<p>La Institución en el marco de sus competencias, desarrolla políticas y labores de conservación y preservación de los recursos, ambientales, culturales y arqueológicos del distrito.</p> <p>La institución dispone e implementa el Plan de Desarrollo Urbano.</p> <p>La institución dispone y utiliza el instrumento de gestión territorial (ZEE) que le permite planificar el desarrollo económico y ecológico a nivel local.</p> <p>¿Cree usted que las medidas de control adoptadas son adecuadas y suficientes?</p>
	Control de la corrupción	<p>La institución cuenta con normas pertinentes para gestionar una gestión adecuada de proyectos de inversión pública.</p> <p>En tu institución, además de la supervisión en la ejecución de obras, también se realiza un seguimiento y monitoreo de las áreas correspondientes.</p>
Gobernanza pública	Efectividad del gobierno	<p>La Autoridad institucional y funcionarios cuentan con liderazgo y estrategias de gestión de conflictos sociales.</p> <p>La Institución gestiona adecuadamente los recursos humanos, logísticos y financieros en el desarrollo integral del distrito.</p> <p>¿Sabe si el Plan de Desarrollo Económico está vinculado a los documentos de gestión requeridos por la normativa (POI, PEI, PDLC)?</p>
	Estabilidad política	<p>Cree que el modelo de gestión que imprime la institución genera confianza y estabilidad social.</p> <p>La Institución cuenta e implementa un Plan de desarrollo Económico en favor de las grandes mayorías.</p> <p>La Institución mantiene una política de gestión de</p>

	conflictos. La Institución implementa espacios, canales de información y estrategias para transparentar la gestión pública.
Calidad regulatoria	Percibe Usted un nivel de aceptación y bienestar social en la población por el modelo y política de gestión administrativa de bienes y servicios La Institución cuenta con procedimientos administrativos y normas que contribuyen a una administración eficiente y eficaz.
Imperio de la ley	La institución posee la capacidad técnica y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento de las diversas normativas de gestión del desarrollo territorial. La institución lleva a cabo la implementación de los procedimientos establecidos en gestión administrativa, presupuestaria, control y supervisión.
Voz y responsabilidad	¿Cree usted que el nivel de responsabilidad de los habitantes del distrito hacia las disposiciones municipales (gobernanza) es el adecuado? La población en el uso de sus derechos ciudadanos, alcanza sugerencias y recomendaciones para su análisis e implementación a la institución.

---

Para asegurar la fiabilidad del instrumento, se realizó la prueba de consistencia interna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos mostraron valores superiores a 0.80 para las variables y sus respectivas dimensiones, lo que denota una alta fiabilidad del instrumento. Estos valores indican que el cuestionario no solo es consistente en su medición, sino que también posee una sólida validez interna, lo que refuerza la solidez y precisión de los datos obtenidos en el estudio.

### 3.4. Procedimiento

El proceso para la recolección de información se inició con la solicitud formal de autorización ante la institución pertinente, con el fin de obtener el consentimiento necesario para aplicar la encuesta a la población de estudio. A continuación, se diseñó el cuestionario en dos formatos: impreso y virtual, para facilitar su aplicación a los trabajadores seleccionados como parte de la muestra. Para garantizar la validez del instrumento, se llevó a cabo una encuesta piloto con un grupo de entre 20 trabajadores,

cuyo propósito fue evaluar la confiabilidad del cuestionario mediante la aplicación de la prueba alfa de Cronbach.

Luego que se dio validez al instrumento, se procedió con la aplicación generalizada de las encuestas. Posteriormente, los datos recolectados fueron tabulados y sistematizados utilizando los programas estadísticos Excel y SPSS, permitiendo organizar la información de manera eficiente. Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas y gráficos, y se llevaron a cabo análisis de regresiones ordinales según las necesidades del estudio. Este proceso permitió dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas, alcanzar los objetivos establecidos y verificar las hipótesis planteadas, contribuyendo al avance y conclusiones de la investigación.

El análisis de los datos recolectados comenzó con la descripción detallada de las variables y dimensiones evaluadas, lo que facilitó la medición de los niveles correspondientes de cada variable. Este paso inicial incluyó la presentación de los resultados en forma de tablas y gráficos, permitiendo una visión clara y estructurada de los datos. A continuación, se aplicó un análisis de estadística inferencial para contrastar las hipótesis planteadas en el estudio.

Para seleccionar la prueba estadística adecuada, se realizó una prueba de normalidad de los datos, lo que permitió determinar si los mismos seguían una distribución normal. Con base en los resultados de esta prueba, se optó por utilizar regresiones ordinales, dado que los datos no cumplían con los supuestos para aplicar pruebas paramétricas. La elección de esta técnica se alineó con los procedimientos estadísticos establecidos por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), quienes destacan la importancia de ajustar las herramientas estadísticas a las características específicas de los datos para asegurar la validez de los resultados obtenidos.

# Capítulo IV

RESULTADOS

---

#### **4. RESULTADOS**

Posteriormente se brindan los resultados descriptivos obtenidos para las variables y dimensiones analizadas, ofreciendo una perspectiva detallada e integral de su comportamiento y características. Estos hallazgos permiten identificar patrones y tendencias relevantes, proporcionando insumos clave para la interpretación y el análisis en el contexto del estudio. Además, se destaca la importancia de estos resultados como base para la formulación de conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la comprensión y mejora del fenómeno investigado.

##### **4.1. Resultados descriptivos**

La primera variable abordada en el análisis fue la gestión pública, eje central del presente estudio. Los resultados obtenidos reflejan percepciones variadas entre los encuestados, destacando un predominio de opiniones que sitúan la calidad de la gestión pública en niveles intermedios o bajos. En este sentido, un 48.7% de los participantes calificó la gestión pública como regular, evidenciando una percepción mayoritaria de desempeño moderado, posiblemente vinculada a la existencia de desafíos significativos en términos de eficiencia, eficacia y transparencia en las prácticas administrativas. Por otro lado, un 27% de los encuestados expresó una evaluación más crítica al considerar la gestión pública como deficiente. Este resultado podría estar asociado a factores estructurales o coyunturales que limitan la capacidad institucional para satisfacer las demandas ciudadanas. En contraste, un 13.9% calificó la gestión como buena, señalando la presencia de aspectos positivos o avances específicos. Finalmente, el 10.4% consideró que la gestión pública es muy buena, una percepción minoritaria que sugiere áreas de éxito puntual o sectores con mejores prácticas dentro del sistema evaluado. Ver Tabla 2.

**Tabla 2**  
*Resultados de la gestión pública en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	0	0
Deficiente	93	27,0
Regular	168	48,7
Bueno	48	13,9
Muy bueno	36	10,4
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La gestión pública fue evaluada mediante tres dimensiones clave, siendo la primera de ellas la gestión política, que aborda aspectos relacionados con la formulación de políticas, la toma de decisiones estratégicas y la capacidad de liderazgo de los actores políticos. Los resultados obtenidos reflejan una dispersión en las percepciones de los encuestados respecto a esta dimensión, destacándose una predominancia de evaluaciones intermedias. En concreto, un 41.7% de los encuestados calificó la gestión política como regular, lo que evidencia una percepción generalizada de desempeño moderado en la articulación y ejecución de las políticas públicas. Esta evaluación podría estar influenciada por la percepción de limitaciones en la capacidad de respuesta o en la coordinación interinstitucional. Por su parte, un 31.6% otorgó una valoración positiva al calificar esta dimensión como buena, lo que sugiere avances en áreas específicas o reconocimiento a esfuerzos destacados en determinados contextos. En contraste, un 14.5% de los participantes calificó la gestión política como deficiente, destacando posibles áreas críticas o falencias estructurales. Finalmente, un 12.2% valoró la gestión política como muy buena, indicando la existencia de logros significativos o buenas prácticas en segmentos específicos del ámbito político-administrativo. Ver Tabla 3.

**Tabla 3**  
*Resultados de la gestión política en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	0	0
Deficiente	50	14,5
Regular	144	41,7
Bueno	109	31,6
Muy bueno	42	12,2
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La gestión administrativa constituye la segunda dimensión clave para la evaluación de la gestión pública, enfocándose en aspectos como la organización, planificación, ejecución de procesos, eficiencia operativa y capacidad de respuesta institucional. Los resultados obtenidos reflejan una variabilidad significativa en las percepciones de los encuestados, con una valoración mayoritaria orientada hacia evaluaciones positivas o intermedias. Un 38% de los encuestados consideró que la gestión administrativa es buena, lo que sugiere avances importantes en términos de implementación de estrategias y cumplimiento de objetivos administrativos en ciertas áreas. Este resultado podría estar relacionado con mejoras en los procesos de planificación, modernización tecnológica o la profesionalización del personal. Por otro lado, un 31% calificó esta dimensión como regular, lo que indica una percepción de desempeño moderado, posiblemente vinculado a desafíos persistentes en eficiencia o coordinación. Sin embargo, un 18.6% evaluó la gestión administrativa como deficiente, lo que subraya problemas estructurales o debilidades operativas en algunos contextos. Finalmente, un 11% otorgó una calificación de muy buena, destacando casos de excelencia en gestión, mientras que un 1.4% percibió la gestión como muy deficiente, señalando la necesidad de atención prioritaria en áreas críticas. Ver Tabla 4.

**Tabla 4**  
*Resultados de la gestión administrativa en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	5	1,4
Deficiente	64	18,6
Regular	107	31,0
Bueno	131	38,0
Muy bueno	38	11,0
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La tercera dimensión evaluada en la gestión pública es la gestión territorial, la cual abarca la capacidad de las administraciones para planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas en el ámbito local, con énfasis en la descentralización, sostenibilidad y desarrollo equitativo de los territorios. Los resultados evidencian una percepción mayoritariamente crítica por parte de los encuestados, lo que pone de manifiesto importantes desafíos estructurales y operativos en esta dimensión. Un 30% de los encuestados calificó la gestión territorial como deficiente, lo que refleja problemas significativos en la planificación, asignación de recursos y cumplimiento de metas en el nivel territorial. Este aspecto se agrava con un 25.8% que la evaluó como muy deficiente, señalando posibles fallas graves en la articulación entre los niveles de gobierno, el acceso a servicios básicos y la participación comunitaria. Por el contrario, un 25.2% consideró la gestión como regular, mostrando un desempeño intermedio en ciertas áreas, mientras que un 13% la calificó como buena, sugiriendo casos aislados de éxito en la implementación de políticas territoriales. Finalmente, un 5.5% la percibió como muy buena, destacando esfuerzos destacados en contextos específicos, aunque representando una minoría en la evaluación global. Ver Tabla 5.

**Tabla 5**  
*Resultados de la gestión territorial en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	89	25,8
Deficiente	105	30,4
Regular	87	25,2
Bueno	45	13,0
Muy bueno	19	5,5
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La segunda variable analizada en el estudio es la gobernanza pública, un componente crítico que evalúa la capacidad de las instituciones para ejercer un liderazgo efectivo, garantizar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y promover la rendición de cuentas. Los resultados obtenidos reflejan una percepción predominantemente moderada entre los encuestados, aunque con una distribución que evidencia desafíos y áreas de mejora significativas. Un 54.5% de los participantes calificó la gobernanza pública como regular, lo que sugiere un desempeño percibido como intermedio en términos de eficiencia institucional y cumplimiento de principios democráticos. Esta percepción podría estar asociada a la persistencia de problemas estructurales y limitaciones en la implementación de políticas públicas inclusivas y transparentes. Por otra parte, un 19.1% evaluó la gobernanza como deficiente, reflejando una insatisfacción considerable con aspectos relacionados a la capacidad de respuesta gubernamental y la confianza en las instituciones. En contraste, un 16.8% consideró que la gobernanza es buena, señalando avances específicos en ciertos contextos o sectores, mientras que un 7% la calificó como muy buena, destacando logros relevantes, aunque minoritarios. Finalmente, un 2.6% otorgó la calificación de muy deficiente, evidenciando percepciones críticas en contextos específicos. Ver Tabla 6.

**Tabla 6**

*Resultados de la gobernanza pública en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	9	2,6
Deficiente	66	19,1
Regular	188	54,5
Bueno	58	16,8
Muy bueno	24	7,0
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La gobernanza pública, como eje fundamental del análisis, se evaluó a través de seis dimensiones, siendo la primera el control de la corrupción. Esta dimensión se centra en la capacidad de las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, así como en la percepción ciudadana respecto a la transparencia y la integridad en la administración pública. Los resultados reflejan una diversidad de opiniones que destacan tanto avances como persistentes desafíos estructurales en este ámbito. El 36.2% de los encuestados calificó el control de la corrupción como regular, lo que indica una percepción de desempeño moderado, probablemente influenciada por esfuerzos parciales de mejora que aún no logran consolidarse de manera efectiva. Por otro lado, un 27.8% lo evaluó como deficiente, señalando insuficiencias en los mecanismos de control, rendición de cuentas y cumplimiento normativo. En contraste, un 23.2% calificó esta dimensión como buena, lo que evidencia avances significativos en algunos sectores, mientras que un 7.2% la percibió como muy buena, destacando prácticas de excelencia en contextos específicos. Finalmente, un 5.5% otorgó una calificación de muy deficiente, evidenciando áreas críticas que requieren atención prioritaria para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Ver Tabla 7.

**Tabla 7**

*Resultados del control de la corrupción en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	19	5,5
Deficiente	96	27,8
Regular	125	36,2
Bueno	80	23,2
Muy bueno	25	7,2
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La segunda dimensión evaluada dentro de la gobernanza pública es la efectividad del gobierno, que analiza la capacidad de las instituciones gubernamentales para formular y ejecutar políticas públicas de manera eficiente, garantizar la prestación adecuada de servicios y responder a las necesidades de la ciudadanía. Los resultados obtenidos reflejan una percepción mayoritariamente crítica, aunque con cierta dispersión entre los niveles de evaluación. Un 50.1% de los encuestados calificó la efectividad del gobierno como regular, lo que sugiere un desempeño percibido como intermedio, posiblemente caracterizado por limitaciones en la capacidad operativa o en la implementación efectiva de estrategias gubernamentales. Por otro lado, un 24.1% consideró que esta dimensión es deficiente, lo que evidencia problemas significativos en términos de gestión, coordinación interinstitucional y cumplimiento de objetivos clave. En contraste, un 12.2% calificó la efectividad del gobierno como buena, indicando avances en áreas específicas o en determinados contextos. Sin embargo, un 11% evaluó esta dimensión como muy deficiente, destacando serias falencias en la capacidad del gobierno para responder a las demandas sociales. Finalmente, un 2.6% consideró la efectividad del gobierno como muy buena, representando casos aislados de excelencia en el desempeño gubernamental. Ver Tabla 8.

**Tabla 8**

*Resultados de la efectividad del gobierno en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	38	11,0
Deficiente	83	24,1
Regular	173	50,1
Bueno	42	12,2
Muy bueno	9	2,6
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La tercera dimensión evaluada en el estudio es la estabilidad política, un componente esencial para el buen funcionamiento de la gobernanza pública, que refleja la capacidad del sistema político para mantener un entorno de orden, previsibilidad y cohesión en la toma de decisiones. Esta dimensión es fundamental para el desarrollo sostenible, ya que la estabilidad política influye directamente en la confianza de los ciudadanos y en la efectividad de las políticas implementadas. Los resultados obtenidos muestran una variabilidad significativa en las percepciones de los encuestados. Un 39.4% calificó la estabilidad política como regular, sugiriendo una percepción de desempeño intermedio, posiblemente influenciada por la presencia de ciertos factores de inestabilidad o incertidumbre que limitan la confianza en las instituciones políticas. En contraste, un 27.2% consideró la estabilidad política como buena, lo que refleja una valoración positiva, aunque moderada, en relación con el equilibrio y la gobernabilidad del país. Un 13.9% evaluó esta dimensión como muy buena, destacando una percepción de alta cohesión y efectividad en la gestión política. Sin embargo, un 9.9% calificó la estabilidad política como deficiente, mientras que un 9.6% la percibió como muy deficiente, lo que indica la existencia de preocupaciones significativas sobre la vulnerabilidad del sistema político frente a factores de inestabilidad o crisis. Ver Tabla 9.

**Tabla 9**  
*Resultados de la estabilidad política en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	33	9,6
Deficiente	34	9,9
Regular	136	39,4
Bueno	94	27,2
Muy bueno	48	13,9
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La cuarta dimensión evaluada en el marco de la gobernanza pública es la calidad regulatoria, que se refiere a la capacidad del gobierno para diseñar, implementar y hacer cumplir marcos normativos claros, eficaces y coherentes, orientados a promover el desarrollo económico, social y ambiental. La calidad regulatoria es un factor crucial para garantizar un entorno favorable para la inversión, la competitividad y la sostenibilidad, además de asegurar la transparencia y la equidad en la regulación de actividades públicas y privadas.

Los resultados obtenidos reflejan una percepción diversa entre los encuestados. Un 36.5% calificó la calidad regulatoria como regular, lo que sugiere una evaluación moderada en cuanto a la efectividad de las políticas regulatorias, posiblemente debido a la existencia de normativas ambiguas, inconsistentes o de difícil aplicación. Un 32.2% calificó esta dimensión como deficiente, lo que indica que una porción significativa de los participantes percibe fallas sustanciales en la calidad y efectividad de las regulaciones, lo que podría limitar su impacto positivo. En contraste, un 14.5% consideró que la calidad regulatoria es buena, lo que sugiere la existencia de marcos normativos efectivos en ciertas áreas. Un 10.7% la evaluó como muy buena, lo que refleja una percepción de alta efectividad en la regulación en contextos específicos. Finalmente, un 6.1% calificó la calidad regulatoria como muy deficiente, evidenciando una preocupación por la falta de coherencia y capacidad regulatoria en ciertas áreas clave. Ver Tabla 10.

**Tabla 10**  
*Resultados de la calidad regulatoria en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	21	6,1
Deficiente	111	32,2
Regular	126	36,5
Bueno	50	14,5
Muy bueno	37	10,7
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La quinta dimensión evaluada dentro del estudio es el imperio de la ley, un principio fundamental que refleja la capacidad del Estado para garantizar la igualdad ante la ley, la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta dimensión abarca la eficacia del sistema judicial, la independencia de los tribunales, la accesibilidad al derecho y la seguridad jurídica, elementos esenciales para el mantenimiento del orden y la confianza en las instituciones públicas. Los resultados obtenidos revelan una percepción variada entre los encuestados. Un 46.1% calificó el imperio de la ley como regular, lo que sugiere una percepción de desempeño moderado en cuanto a la aplicación uniforme y efectiva de las normas legales, posiblemente debido a la presencia de debilidades en el sistema judicial o en la implementación de políticas públicas relacionadas con la justicia.

Por otro lado, un 28.4% de los participantes evaluó el imperio de la ley como buena, lo que refleja una valoración positiva en relación con la efectividad del sistema legal en ciertos contextos. Un 10.4% consideró que el imperio de la ley es muy bueno, destacando el buen funcionamiento de las instituciones judiciales en áreas específicas. Sin embargo, un 9.6% lo calificó como deficiente, señalando problemas en la equidad y eficacia del sistema judicial, mientras que un 5.5% lo percibió como muy deficiente, lo que indica la presencia de serias limitaciones en el acceso a la justicia y la protección de los derechos. Ver Tabla 11.

**Tabla 11**  
*Resultados del imperio de la Ley en municipios*

Nivel	f	%
Muy deficiente	19	5,5
Deficiente	33	9,6
Regular	159	46,1
Bueno	98	28,4
Muy bueno	36	10,4
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

La sexta dimensión evaluada en el estudio es la voz y responsabilidad, un aspecto fundamental de la gobernanza pública que se refiere a la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones políticas y gubernamentales, así como a la responsabilidad de los actores públicos en su rendición de cuentas ante la sociedad. Esta dimensión aborda la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones y la efectividad de los mecanismos de control social, elementos clave para fortalecer la legitimidad del gobierno y fomentar una cultura de responsabilidad pública.

Los resultados obtenidos muestran una evaluación predominantemente intermedia. Un 47.8% de los encuestados calificó la voz y responsabilidad como regular, lo que refleja una percepción de desempeño moderado en cuanto a la efectividad de los mecanismos de participación y rendición de cuentas. Este resultado sugiere la existencia de esfuerzos en algunas áreas, pero también de limitaciones en la implementación de políticas de inclusión y transparencia. Por otro lado, un 18% evaluó esta dimensión como deficiente, destacando posibles falencias en la participación efectiva de la ciudadanía o en la capacidad de los gobiernos para rendir cuentas adecuadamente. Un 15.9% la percibió como buena, lo que indica la presencia de avances en algunos sectores. Un 10.4% consideró que la voz y responsabilidad es muy deficiente, sugiriendo preocupaciones significativas en torno a la falta de canales de participación y de mecanismos de control ciudadano. Finalmente, un 7.8% calificó esta dimensión como muy buena, reflejando la

existencia de prácticas destacadas en cuanto a la inclusión social y la rendición de cuentas en determinados contextos. Ver Tabla 12.

**Tabla 12**  
*Resultados de la voz y responsabilidad en municipios*

Nivel	VR	
	f	%
Muy deficiente	36	10,4
Deficiente	62	18,0
Regular	165	47,8
Bueno	55	15,9
Muy bueno	27	7,8
Total	345	100,0

*Nota:* Elaborado a partir de los resultados de las encuestas.

#### 4.2. Resultados inferenciales

##### *Influencia de la gestión pública en la gobernanza pública en gobiernos locales*

El análisis de la influencia de la gestión pública en la gobernanza pública se ha llevado a cabo utilizando regresiones ordinales, un enfoque estadístico adecuado para examinar variables dependientes categóricas ordenadas. Esta metodología permite capturar la relación entre variables y sus efectos en el comportamiento de la gobernanza pública, permitiendo una interpretación precisa de los datos. En cuanto al ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 717.34, con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ , lo que indica un ajuste adecuado y una significancia estadística robusta en la relación entre las variables estudiadas. Este resultado sugiere que el modelo propuesto es capaz de capturar las interacciones entre las variables y predecir de manera significativa la influencia de la gestión pública sobre la gobernanza pública. Ver Tabla 13.

**Tabla 13**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la gobernanza pública en gobiernos locales*

Información de ajuste de los modelos					Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado		
Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.		Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	0.875
Sólo intersección	1803.313				Pearson	26214.284	1054	0.000	Nagelkerke	0.876
Final	1085.973	717.34	34	0.000	Desvianza	1188.552	1054	0.002	McFadden	0.318

Función de enlace: Logit

Por otro lado, la bondad de ajuste del modelo reveló un Chi-cuadrado de 26214.284, con 1054 grados de libertad y un valor de  $p = 0.000$ , confirmando la validez del modelo en términos de su capacidad para representar correctamente las observaciones empíricas. Adicionalmente, se determinó que la gestión pública influye en la gobernanza pública en un 87.6%, según el Pseudo R-cuadrado calculado a través de la prueba de Nagelkerke. Este valor refleja una fuerte relación entre las variables, destacando la relevancia de la gestión pública como un factor determinante en el desempeño de la gobernanza pública. De esta manera se logró probar la primera hipótesis, demostrando que la gestión pública influye significativamente en la gobernanza pública en gobiernos locales peruanos. Los resultados se evidencian en la Tabla 13.

### ***Influencia de la gestión pública en el control de la corrupción en gobiernos locales***

El análisis de la influencia de la gestión pública en el control de la corrupción se ha realizado mediante regresiones ordinales, un modelo estadístico adecuado para abordar variables dependientes categóricas ordenadas. Este enfoque permite evaluar la relación entre la gestión pública y el control de la corrupción, proporcionando una visión detallada del impacto que la eficiencia y efectividad en la gestión pública pueden tener en la reducción de prácticas corruptas. En términos de ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 310.102, con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ . Este resultado sugiere que el modelo propuesto se ajusta significativamente a los datos, lo que valida la hipótesis de que la gestión pública tiene un impacto directo en el

control de la corrupción. Un valor de p tan bajo indica que la relación entre las variables es altamente significativa desde el punto de vista estadístico.

Respecto a la bondad de ajuste, el Chi-cuadrado resultante fue de 2235.228, con 306 grados de libertad y un  $p = 0.000$ , lo que también confirma un buen ajuste del modelo, evidenciando que la estructura del modelo refleja de manera adecuada los datos observados. Adicionalmente, se determinó que la gestión pública influye en un 60.2% en el control de la corrupción, según el Pseudo R-cuadrado calculado mediante la prueba de Nagelkerke. Este resultado indica una relación fuerte y significativa, lo que subraya la importancia de una gestión pública eficiente como un factor clave en la lucha contra la corrupción. De esta manera se logró probar la validez de la hipótesis dos, afirmando que la gestión pública influye significativamente en el control de la corrupción en gobiernos locales peruanos. Ver Tabla 14.

**Tabla 14**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en el control de la corrupción en gobiernos locales*

Modelo	Información de ajuste de los modelos				Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado		
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.		Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	
Sólo intersección	1124,074				Pearson	2235,228	306	,000	Nagelkerke	,602
Final	813,971	310,102	34	,000	Desvianza	748,137	306	,000	McFadden	,214

Función de enlace: Logit

### ***Influencia de la gestión pública en la efectividad del gobierno en los municipios***

El análisis de la influencia de la gestión pública en la efectividad del gobierno en los municipios se ha llevado a cabo mediante regresiones ordinales, una metodología estadística idónea para evaluar relaciones entre variables dependientes categóricas ordenadas. Este enfoque permite medir de manera precisa cómo las distintas dimensiones de la gestión pública inciden en el desempeño gubernamental a nivel municipal. En cuanto al ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 756.974, con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ , lo que indica

que el modelo es estadísticamente significativo y que las variables incluidas en el análisis están relacionadas de manera relevante con la efectividad del gobierno municipal. Este resultado refleja que la estructura del modelo propuesto es adecuada para los datos y captura de forma precisa las interacciones entre las variables estudiadas.

Respecto a la bondad de ajuste, el Chi-cuadrado resultante fue de 2026.091, con 306 grados de libertad y un  $p = 0.000$ , confirmando que el modelo ajusta bien a las observaciones empíricas. Finalmente, se determinó que la gestión pública influye en un 90.2% sobre la efectividad del gobierno municipal, según el Pseudo R-cuadrado obtenido mediante la prueba de Nagelkerke. Este alto porcentaje destaca la relevancia de una gestión pública eficiente en la mejora del desempeño gubernamental a nivel municipal, subrayando su impacto directo y significativo. Por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis tres, afirmando que la gestión pública influye significativamente en la efectividad de gobierno en los municipios peruanos. Ver Tabla 15.

**Tabla 15**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la efectividad del gobierno en los municipios*

Modelo	Información de ajuste de los modelos				Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado		
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.	Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	,889	
Sólo intersección	1101,775				Pearson	2026,091	306	,000	Nagelkerke	,902
Final	344,802	756,974	34	,000	Desvianza	612,499	306	,000	McFadden	,518

Función de enlace: Logit

### ***Influencia de la gestión pública en la estabilidad política de los gobiernos locales***

El análisis de la influencia de la gestión pública en la estabilidad política se ha realizado utilizando regresiones ordinales, un enfoque estadístico que resulta adecuado para evaluar la relación entre variables dependientes categóricas ordenadas. Este modelo ha permitido investigar cómo diferentes aspectos de la gestión pública impactan en la estabilidad política de un país, un componente clave para el desarrollo sostenido y el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. En términos de ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 602.141 con 34 grados de libertad y un

nivel de significancia de  $p = 0.000$ . Este resultado indica que el modelo es altamente significativo, lo que sugiere que las variables analizadas explican de manera relevante las variaciones en la estabilidad política. El valor de  $p$  inferior a  $0.05$  refuerza la validez de los hallazgos, confirmando la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la gestión pública y la estabilidad política.

En cuanto a la bondad de ajuste, el Chi-cuadrado obtenido fue de  $5402.442$  con  $340$  grados de libertad y  $p = 0.000$ , lo que también valida el modelo y respalda su capacidad para representar de manera adecuada los datos empíricos. Finalmente, se determinó que la gestión pública influye en un  $83.7\%$  en la estabilidad política, según el Pseudo R-cuadrado obtenido mediante la prueba de Nagelkerke. Este resultado subraya el impacto significativo de una gestión pública eficiente en el fortalecimiento de la estabilidad política. De esta manera se determinó la validez de la hipótesis cuatro, afirmando que la gestión pública influye significativamente en la estabilidad política en gobiernos locales peruanos. Ver Tabla 16.

**Tabla 16**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la estabilidad política de los gobiernos locales*

Modelo	Información de ajuste de los modelos				Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado	
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.	Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	Nagelkerke
Sólo intersección	1065,880				Pearson	5402,442	340	,000	,837
Final	463,738	602,141	34	,000	Desvianza	512,419	340	,000	,408

Función de enlace: Logit

### ***Influencia de la gestión pública en la calidad regulatoria de los gobiernos locales***

El análisis de la influencia de la gestión pública en la calidad regulatoria se ha realizado utilizando regresiones ordinales, una técnica estadística adecuada para estudiar la relación entre variables dependientes categóricas ordenadas. Esta metodología permite evaluar cómo diferentes aspectos de la gestión pública impactan en la formulación, implementación y efectividad de las políticas regulatorias que estructuran el marco legal y normativo de un país, lo cual es esencial para promover el desarrollo

económico y garantizar un entorno competitivo y justo. En cuanto al ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 351.256 con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ . Este resultado indica que el modelo es estadísticamente significativo, lo que refuerza la hipótesis de que existe una relación significativa entre la gestión pública y la calidad regulatoria. El valor de  $p$  inferior a 0.05 asegura que los resultados obtenidos no son producto del azar, sino que reflejan una relación real entre las variables estudiadas.

Respecto a la bondad de ajuste, se obtuvo un Chi-cuadrado de 6744.920 con 374 grados de libertad y un valor de  $p = 0.000$ , lo que respalda aún más la validez del modelo y su capacidad para representar adecuadamente los datos observados. Finalmente, se determinó que la gestión pública influye en un 64.6% en la calidad regulatoria, según el Pseudo R-cuadrado obtenido mediante la prueba de Nagelkerke. Este hallazgo subraya la relevancia de una gestión pública eficiente en la mejora de la calidad regulatoria y la promoción de un entorno normativo robusto. Estos resultados permitieron probar la validez de la hipótesis cinco, afirmando que la gestión pública influye significativamente en la calidad regulatoria en gobiernos locales peruanos. Ver Tabla 17.

**Tabla 17**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la estabilidad política de los gobiernos locales*

Modelo	Información de ajuste de los modelos					Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado	
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.		Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	
Sólo intersección	1203,474				Pearson	6744,920	374	,000	Nagelkerke	,646
Final	852,217	351,256	34	,000	Desviación	777,874	374	,000	McFadden	,225

Función de enlace: Logit

### ***Influencia de la gestión pública en el imperio de la Ley en gobiernos locales***

El análisis de la influencia de la gestión pública en el imperio de la ley se ha llevado a cabo mediante regresiones ordinales, un enfoque estadístico que permite estudiar las relaciones entre variables dependientes categóricas ordenadas. Este modelo ha sido

aplicado para evaluar cómo las distintas dimensiones de la gestión pública impactan en el fortalecimiento del estado de derecho, un componente fundamental para garantizar la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos dentro de un marco institucional y normativo estable. En términos del ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 778.718 con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ . Este resultado indica que el modelo es altamente significativo y que existe una relación estadística fuerte entre las variables que se analizan, lo que valida la hipótesis de que la gestión pública tiene un impacto relevante en el imperio de la ley. El valor de  $p$  inferior a 0.05 refuerza la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Respecto a la bondad de ajuste, el valor de Chi-cuadrado fue de 1631.998 con 238 grados de libertad y  $p = 0.000$ , lo que confirma la adecuación del modelo en cuanto a la representación de los datos empíricos. Finalmente, se determinó que la gestión pública influye en un 91.7% en el imperio de la ley, según el Pseudo R-cuadrado obtenido mediante la prueba de Nagelkerke. Este hallazgo destaca la relevancia de una gestión pública eficiente para el fortalecimiento del estado de derecho y la consolidación de la legalidad en la sociedad. Por lo tanto, con estos resultados se logró medir la validez de la hipótesis seis, afirmando que la gestión pública influye significativamente en el imperio de la Ley en gobiernos locales peruanos. Ver Tabla 18.

**Tabla 18**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la estabilidad política de los gobiernos locales*

Modelo	Información de ajuste de los modelos				Pearson	Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado	
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.		Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	
Sólo intersección	966,677				1631,998	238	,000	Nagelkerke	,917	
Final	187,959	778,718	34	,000	Desvianza	462,789	238	,000	McFadden	,601

Función de enlace: Logit

### ***Influencia de la gestión pública en la voz y responsabilidad en gobiernos locales***

El análisis de la influencia de la gestión pública en la "voz y responsabilidad" se ha realizado mediante regresiones ordinales, una metodología estadística adecuada para

estudiar las relaciones entre variables dependientes categóricas ordenadas. Este enfoque ha permitido examinar cómo las distintas dimensiones de la gestión pública afectan la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la capacidad de los actores sociales y políticos para dar respuesta a las necesidades de la población, aspectos fundamentales para una democracia funcional y representativa.

En cuanto al ajuste del modelo, se obtuvo un valor de Chi-cuadrado de 377.912 con 34 grados de libertad y un nivel de significancia de  $p = 0.000$ . Este resultado indica que el modelo es altamente significativo, lo que valida la relación entre las variables de gestión pública y "voz y responsabilidad", sugiriendo que los procesos de gestión pública tienen un impacto directo en la promoción de la participación y el ejercicio de la responsabilidad pública. El valor de  $p$  menor a 0.05 refuerza la solidez de los resultados obtenidos, confirmando que las asociaciones observadas no son producto del azar.

Respecto a la bondad de ajuste, se obtuvo un Chi-cuadrado de 1500.622 con 238 grados de libertad y  $p = 0.000$ , lo que valida la capacidad del modelo para reflejar adecuadamente las dinámicas observadas en los datos. Finalmente, se determinó que la gestión pública influye en un 68.1% en la "voz y responsabilidad", según el Pseudo R-cuadrado calculado mediante la prueba de Nagelkerke. Este hallazgo destaca la importancia de una gestión pública efectiva para fortalecer los mecanismos de participación y la rendición de cuentas dentro de un marco democrático. De esta manera se logró probar la validez de la hipótesis siete, afirmando que la gestión pública influye significativamente en la voz y responsabilidad en gobiernos locales peruanos. Ver Tabla 18.

**Tabla 19**

*Regresión ordinal para medir la influencia de la gestión pública en la voz y responsabilidad en gobiernos locales*

Modelo	Información de ajuste de los modelos					Bondad de ajuste			Pseudo R cuadrado	
	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.		Chi-cuadrado	gl	Sig.	Cox y Snell	,666
Sólo intersección	971,140				Pearson	1500,622	238	,000	Nagelkerke	,681
Final	593,229	377,912	34	,000	Desvianza	526,857	238	,000	McFadden	,289

Función de enlace: Logit

# Capítulo V

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

---

## **5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES**

### **5.1 Discusión**

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación se analizan a la luz de su relevancia práctica en el ámbito de la gestión y la gobernabilidad, explorando su correspondencia y aportes en comparación con los marcos teóricos predominantes en este campo. Este ejercicio crítico permite situar los resultados en el contexto del conocimiento existente, evaluando su consistencia, originalidad y posibles implicaciones para el desarrollo del área. Asimismo, se contrastan estos resultados con estudios previos, identificando convergencias, divergencias y potenciales lagunas de investigación que puedan orientar futuras líneas de indagación académica y práctica profesional. Esta discusión busca no solo interpretar los datos encontrados, sino también contribuir al debate académico en torno a las dinámicas y desafíos contemporáneos de la gestión y gobernabilidad.

El propósito fundamental de la presente investigación fue analizar de manera rigurosa cómo la gestión pública impacta y condiciona la gobernabilidad en el contexto de los gobiernos locales peruanos. Este objetivo busca desentrañar las dinámicas interdependientes entre los procesos de planificación, implementación y evaluación de políticas públicas, y los niveles de estabilidad, legitimidad y eficacia en la conducción de los asuntos públicos a nivel local. Mediante un enfoque metodológico integral, se pretende generar un aporte sustantivo al entendimiento de cómo las prácticas de gestión pública pueden fortalecer o debilitar la gobernabilidad, considerando las particularidades sociales, económicas y políticas que caracterizan al entorno peruano.

Los resultados revelan que la gestión pública en los gobiernos locales peruanos es percibida mayoritariamente como deficiente por los encuestados. Esta percepción apunta a una serie de problemáticas críticas que incluyen la inadecuada gestión de procedimientos administrativos, la deficiente prestación de servicios públicos, el uso subóptimo de los presupuestos asignados, y la prevalencia de prácticas asociadas a la corrupción. Estas deficiencias no solo reflejan una debilidad estructural en los procesos

administrativos, sino que también indican un distanciamiento significativo de los principios postulados por la teoría contemporánea de la gestión pública. Según modelos teóricos como el Nuevo Gestión Pública (NGP), una administración eficiente se fundamenta en la transparencia, la rendición de cuentas y la orientación hacia resultados, principios que parecen ausentes en la percepción de los encuestados. Además, el paradigma de la gobernanza colaborativa sugiere que una gestión pública eficaz requiere de la interacción activa entre los actores gubernamentales y la ciudadanía para co-crear soluciones a problemas públicos. Sin embargo, los datos indican que los altos niveles de corrupción y los procedimientos administrativos excesivamente lentos limitan estas interacciones y erosionan la confianza ciudadana.

Comparando con estudios previos, la literatura sugiere que los gobiernos locales enfrentan desafíos adicionales derivados de la falta de capacidades institucionales y de la centralización en la toma de decisiones. Estos factores podrían explicar, al menos parcialmente, los plazos excesivos y la baja eficiencia percibida en la prestación de servicios. La teoría también destaca que una gestión pública deficiente no solo compromete la eficiencia administrativa, sino que tiene un impacto directo sobre la gobernabilidad al debilitar la legitimidad y la estabilidad institucional. En este sentido, los hallazgos de este estudio no solo ratifican estas preocupaciones, sino que amplían el debate al resaltar cómo las deficiencias de gestión pública en contextos locales específicos generan un círculo vicioso de baja confianza pública, corrupción y servicios ineficientes, aspectos que limitan profundamente la capacidad de los gobiernos locales para responder de manera efectiva a las necesidades ciudadanas.

Los resultados indican que la gobernanza pública en los gobiernos locales peruanos es percibida mayoritariamente como regular o deficiente. Esta valoración pone de manifiesto una participación ciudadana limitada, lo que genera un alto grado de desconocimiento por parte de los pobladores acerca de las acciones emprendidas en el marco de la gestión pública. Este déficit participativo no solo refleja un distanciamiento entre los gobiernos locales y la ciudadanía, sino que también evidencia una contravención de los principios fundamentales de la gobernanza pública establecidos en la teoría.

Desde un marco teórico, la gobernanza pública contemporánea se concibe como un proceso inclusivo y colaborativo que integra activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la supervisión de las políticas públicas. Modelos como el de gobernanza democrática subrayan la importancia de fomentar canales efectivos de participación y transparencia como pilares para fortalecer la legitimidad y la rendición de cuentas. Sin embargo, la percepción de una participación ciudadana limitada sugiere que estos principios no se están implementando adecuadamente en el contexto de los gobiernos locales peruanos. En comparación con otros estudios, investigaciones previas han señalado que uno de los principales desafíos para la gobernanza pública en América Latina, incluido Perú, es la persistencia de estructuras jerárquicas y centralizadas que dificultan la inclusión ciudadana. Según autores como Grindle (2012), la falta de mecanismos participativos robustos no solo afecta la percepción ciudadana de la gestión, sino que también perpetúa desigualdades en el acceso a los servicios y fomenta la desconfianza hacia las instituciones públicas.

Además, estudios recientes han identificado que en contextos de gobiernos locales con recursos limitados y altos niveles de corrupción, como en varias regiones de Perú, la participación ciudadana tiende a ser relegada debido a la falta de incentivos y a la percepción de ineficacia en los procesos participativos. Esto refuerza los hallazgos del presente estudio, al destacar cómo el desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre las acciones gubernamentales no solo es un síntoma de baja participación, sino también un indicador de una desconexión estructural entre la administración pública local y las comunidades a las que debería servir. En conjunto, los hallazgos de esta investigación subrayan la necesidad de replantear los enfoques actuales hacia la gobernanza pública en los gobiernos locales, adoptando estrategias que prioricen la transparencia, la inclusión ciudadana y la rendición de cuentas como herramientas esenciales para revertir esta percepción de deficiencia y promover una gestión pública más participativa y efectiva.

Los hallazgos de la presente investigación confirman que la gestión pública tiene una alta influencia en la gobernanza pública, lo cual resalta la necesidad de que los gobiernos locales, a través de sus actores principales, promuevan espacios efectivos de

participación ciudadana. Esta relación indica que una gestión pública eficiente y transparente no solo mejora la asignación y utilización de los recursos públicos, sino que también fortalece la legitimidad institucional y fomenta un entorno propicio para el cogobierno, donde las comunidades participan activamente en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva teórica, la interrelación entre gestión y gobernanza se sustenta en modelos como el de gobernanza colaborativa y el enfoque de gestión orientada a resultados. Estos paradigmas destacan que la participación ciudadana es un componente esencial para alinear las políticas públicas con las necesidades reales de la población. La gestión pública, en este sentido, actúa como un facilitador clave al crear las condiciones necesarias para la inclusión ciudadana y la corresponsabilidad en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, para que esto sea efectivo, es imperativo que los gobiernos locales superen barreras como la falta de transparencia, los altos niveles de burocracia y la corrupción, factores que, según los resultados, limitan significativamente la gobernanza pública.

Al comparar con otros estudios previos, investigaciones realizadas en contextos similares en América Latina corroboran esta estrecha relación entre gestión y gobernanza. Por ejemplo, estudios de Avritzer (2009) y Fung (2015) destacan que los espacios de participación, como los presupuestos participativos y las audiencias públicas, contribuyen a una mejor identificación de las necesidades locales, aumentando la confianza en las instituciones y promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos. No obstante, otros estudios, como los de Grindle (2012), advierten que, en contextos con debilidades institucionales, estos mecanismos pueden convertirse en ejercicios simbólicos sin impacto real, lo que refuerza la importancia de contar con una gestión pública sólida y comprometida.

En el caso específico de los gobiernos locales peruanos, se evidencia que la promoción de espacios de participación ciudadana sigue siendo limitada y, en muchos casos, reactiva más que proactiva. Este déficit no solo restringe la capacidad de las comunidades para incidir en la toma de decisiones, sino que también perpetúa una gestión de recursos desarticulada de las prioridades ciudadanas. Por lo tanto, una gestión

pública que facilite y fomente la gobernanza colaborativa podría convertirse en un catalizador para el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible a nivel local. En síntesis, los resultados destacan que la mejora de la gobernanza pública depende en gran medida de una gestión pública capaz de priorizar la transparencia, la inclusión y la corresponsabilidad. Esto requiere de un cambio paradigmático en los gobiernos locales, donde la ciudadanía sea vista no solo como receptora de servicios, sino como un actor activo en la construcción de soluciones y en la optimización de los recursos públicos.

Los resultados obtenidos evidencian que el control de la corrupción en los gobiernos locales es percibido como regular o deficiente por la mayoría de los encuestados. Este hallazgo pone de manifiesto dos factores críticos: la limitada participación ciudadana en los procesos de control y la insuficiente convocatoria por parte de los gobiernos locales para involucrar a la ciudadanía. Además, el desconocimiento de los mecanismos disponibles para supervisar y denunciar actos de corrupción acentúa esta problemática, perpetuando un círculo vicioso de opacidad y desconfianza hacia las instituciones públicas.

Desde un enfoque teórico, el control de la corrupción es considerado un elemento central en el fortalecimiento de la gobernanza pública y la legitimidad institucional. Modelos como el de Accountability Social y el enfoque de Transparencia y Gobernabilidad destacan que la participación activa de los ciudadanos en procesos de control y vigilancia es fundamental para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, estos marcos también subrayan que para que la participación sea efectiva, es necesario que existan mecanismos accesibles, transparentes y respaldados por la voluntad política de los gobiernos locales. Los hallazgos de este estudio sugieren que estos elementos clave no están plenamente implementados en los gobiernos locales peruanos, lo que limita el impacto de las iniciativas contra la corrupción.

Al comparar con otros estudios previos, se encuentran coincidencias significativas. Por ejemplo, investigaciones realizadas por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2010), en el marco de los indicadores de gobernanza mundial, destacan que, en países con altos niveles de corrupción, como en varias regiones de América Latina, la limitada

participación ciudadana es un obstáculo recurrente. De manera similar, estudios en contextos locales de Perú, como los realizados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), subrayan que la falta de transparencia en los procedimientos y la ausencia de canales efectivos de denuncia disminuyen la capacidad de los ciudadanos para involucrarse en el control de la corrupción.

Por otro lado, experiencias exitosas en otros contextos subnacionales demuestran que el fortalecimiento de la participación ciudadana y la implementación de tecnologías de la información para la rendición de cuentas pueden ser herramientas poderosas para combatir la corrupción. Por ejemplo, casos documentados en Brasil y Colombia han mostrado que plataformas digitales para el monitoreo de presupuestos y la denuncia anónima han incrementado significativamente la participación ciudadana y reducido los niveles de corrupción en gobiernos locales. Estos casos resaltan el potencial que tienen las estrategias inclusivas y tecnológicas para mejorar el control de la corrupción, contrastando con las limitaciones observadas en los gobiernos locales peruanos.

En ese sentido, el control de la corrupción en los gobiernos locales peruanos enfrenta desafíos estructurales que se reflejan en la limitada participación ciudadana y en la escasa promoción de mecanismos efectivos de control. Para superar estas barreras, resulta imprescindible que los gobiernos locales no solo adopten políticas de transparencia más robustas, sino que también inviertan en la capacitación de los ciudadanos y en la creación de canales accesibles para la supervisión y denuncia. En última instancia, la integración activa de los ciudadanos en los procesos de control no solo contribuiría a reducir los niveles de corrupción, sino que también fortalecería la confianza en las instituciones públicas, consolidando un modelo de gobernanza más legítimo y participativo.

La investigación demuestra que la gestión pública ejerce una influencia moderada en el control de la corrupción. Este hallazgo destaca la necesidad de que los gestores públicos implementen acciones estratégicas orientadas a la inserción activa de los ciudadanos en los procesos de supervisión y control. Una gestión pública efectiva puede actuar como un facilitador clave al establecer mecanismos que promuevan la

transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, factores indispensables para combatir la corrupción de manera sostenible.

Desde un marco teórico, el modelo de New Public Management (NPM) enfatiza la importancia de adoptar prácticas de gestión basadas en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la corrupción en las instituciones públicas. Este enfoque resalta que la inclusión ciudadana en los procesos de control no solo legitima las acciones gubernamentales, sino que también actúa como un disuasor natural de prácticas corruptas. Asimismo, la teoría de Accountability Social señala que la integración de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la supervisión pública fomenta un entorno de vigilancia constante que dificulta la perpetuación de prácticas corruptas.

No obstante, la influencia moderada encontrada en este estudio puede ser interpretada como una señal de que, si bien los gestores públicos están adoptando algunas prácticas orientadas a la rendición de cuentas, estas no son suficientes para garantizar un impacto significativo en el control de la corrupción. Esto sugiere la necesidad de fortalecer no solo los procesos internos de gestión, sino también los mecanismos externos que faciliten una participación ciudadana activa y efectiva.

La literatura empírica respalda los hallazgos de este estudio. Por ejemplo, investigaciones realizadas por Kaufmann et al. (2010) indican que la calidad de la gestión pública está directamente relacionada con los niveles de corrupción: a mayor transparencia y eficiencia en la administración, menor es la percepción y presencia de prácticas corruptas. Sin embargo, estudios en contextos de gobiernos locales en América Latina, como los de Smulovitz y Peruzzotti (2000), señalan que los avances en el control de la corrupción suelen verse limitados por la falta de mecanismos participativos sólidos y por la resistencia institucional a ceder espacios de control a la ciudadanía.

Por otro lado, experiencias exitosas en países como Brasil, donde la implementación de presupuestos participativos ha incrementado la participación ciudadana en el uso de recursos públicos, muestran que la gestión pública puede tener un impacto significativo en la reducción de la corrupción cuando se combina con mecanismos de participación directa. Estas iniciativas han demostrado ser efectivas no

solo para mejorar la transparencia, sino también para empoderar a los ciudadanos en su rol de supervisores activos. En el caso peruano, estudios del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señalan que, aunque los gestores públicos reconocen la importancia de la participación ciudadana, la implementación de políticas efectivas en este ámbito sigue siendo limitada. La falta de recursos, el desconocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y la prevalencia de estructuras administrativas centralizadas son factores que limitan la influencia de la gestión pública en el control de la corrupción.

Los resultados de la investigación evidencian que la efectividad del gobierno en los municipios es percibida mayoritariamente como regular o deficiente. Este hallazgo refleja que, a pesar de los esfuerzos realizados, los gobiernos municipales enfrentan serias limitaciones para implementar políticas públicas y prestar servicios de manera eficiente. Una de las principales implicaciones de esta percepción es que la baja participación ciudadana limita la posibilidad de alcanzar una gobernanza efectiva, afectando negativamente la legitimidad y la sostenibilidad de las decisiones gubernamentales.

Desde un marco teórico, la gobernanza efectiva se asocia con la capacidad de los gobiernos para articular acciones que integren a múltiples actores, incluyendo a la ciudadanía, en procesos de toma de decisiones, diseño de políticas y supervisión de resultados. La teoría de Gobernanza Colaborativa sostiene que una gestión efectiva debe basarse en un modelo de participación inclusiva, donde los ciudadanos no solo actúen como receptores de servicios, sino también como co-creadores de soluciones. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que los municipios enfrentan desafíos estructurales para implementar este modelo, lo que repercute en una gestión desarticulada de las prioridades locales. Asimismo, la teoría de Rendición de Cuentas Democrática señala que la efectividad gubernamental depende, en gran medida, de la existencia de mecanismos de transparencia y de participación activa que permitan a la ciudadanía monitorear y evaluar las acciones gubernamentales. La ausencia o debilidad de estos mecanismos, como se observa en los municipios evaluados, puede contribuir a una percepción de ineficiencia y a una desconexión entre el gobierno local y sus ciudadanos.

Estudios previos confirman las limitaciones identificadas en este trabajo. Por ejemplo, investigaciones realizadas por Grindle (2012), en América Latina destacan que la efectividad gubernamental en el nivel local está estrechamente vinculada con la capacidad de los municipios para involucrar a las comunidades en procesos participativos. Sin embargo, en contextos donde la participación es limitada o reactiva, los gobiernos locales tienden a ser percibidos como ineficientes, independientemente de los recursos que dispongan. En el caso de Perú, estudios del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Defensoría del Pueblo han señalado que las estructuras de gobernanza local enfrentan desafíos importantes, como la falta de recursos técnicos y financieros, altos niveles de centralización y una limitada cultura de participación ciudadana. Estos factores contribuyen a la percepción de que los municipios no logran satisfacer las demandas ciudadanas de manera efectiva, reforzando una brecha de confianza entre las autoridades locales y la población.

Por otro lado, investigaciones realizadas en contextos exitosos, como los presupuestos participativos implementados en Porto Alegre, Brasil, demuestran que los modelos de gobernanza que priorizan la participación ciudadana no solo mejoran la percepción de efectividad gubernamental, sino que también aumentan la calidad de las decisiones y la asignación de recursos públicos. Estos casos subrayan que la efectividad gubernamental no se limita a la capacidad administrativa, sino que también depende de la construcción de relaciones de confianza y corresponsabilidad con la ciudadanía.

La investigación evidencia que la gestión pública tiene un alto impacto en la efectividad del gobierno en los municipios peruanos. Este resultado destaca la relación directa entre la implementación de procesos de gestión pública sólidos y una mejora en la capacidad de los gobiernos locales para responder de manera eficiente y eficaz a las necesidades de la población. En este sentido, el fortalecimiento de la gestión pública se presenta como un factor clave para transformar las comunas en instituciones más efectivas, transparentes y orientadas a resultados.

Desde un enfoque teórico, el modelo de New Public Management (NPM) establece que la adopción de principios de eficiencia, transparencia y enfoque en

resultados puede incrementar significativamente la efectividad de los gobiernos locales. Este enfoque sugiere que la implementación de procesos de gestión pública profesionalizados, basados en indicadores de desempeño y en la rendición de cuentas, permite a los municipios mejorar la asignación de recursos, reducir los tiempos administrativos y optimizar la prestación de servicios. Asimismo, la teoría de Good Governance subraya que la efectividad gubernamental no solo depende de la calidad técnica de la gestión, sino también de la capacidad de las instituciones para integrar a diversos actores en los procesos de toma de decisiones. Según esta perspectiva, los municipios que adoptan prácticas participativas y colaborativas tienden a lograr mayores niveles de efectividad, ya que alinean sus acciones con las prioridades y expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de los municipios peruanos, los resultados de este estudio sugieren que la implementación de procesos de gestión pública está limitada por factores como la falta de capacitación técnica, la escasez de recursos financieros y los altos niveles de centralización administrativa, lo que reduce el impacto potencial de estas estrategias en la efectividad gubernamental.

Los hallazgos de esta investigación coinciden con estudios previos que han examinado la relación entre gestión pública y efectividad gubernamental en contextos locales. Por ejemplo, investigaciones de Grindle (2007), destacan que la capacidad de los gobiernos locales para implementar políticas públicas efectivas está estrechamente vinculada con la profesionalización de la gestión pública. De manera similar, estudios realizados por el Banco Mundial en América Latina subrayan que municipios con una mayor inversión en la modernización de procesos administrativos tienden a registrar mejores indicadores de efectividad gubernamental, incluyendo la satisfacción ciudadana y la calidad de los servicios públicos. En el caso de Perú, investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señalan que los municipios que han adoptado prácticas innovadoras de gestión, como el uso de tecnologías de la información y la promoción de presupuestos participativos, muestran avances significativos en términos de efectividad gubernamental. Sin embargo, estos mismos estudios advierten que estos avances son desiguales y que la mayoría de las comunas aún enfrenta dificultades para

implementar procesos de gestión pública debido a barreras estructurales y culturales. Por otro lado, experiencias en otros países subrayan el impacto positivo de una gestión pública fortalecida en la efectividad gubernamental. Por ejemplo, el modelo de gestión adoptado en Medellín, Colombia, que combina planificación estratégica, transparencia y participación ciudadana, ha sido ampliamente reconocido como un caso de éxito en la mejora de la efectividad de los gobiernos locales. Estos ejemplos internacionales destacan que la gestión pública puede ser un catalizador crucial para la efectividad gubernamental, siempre y cuando se diseñe y aplique en función de las características y necesidades específicas de cada contexto local.

La investigación revela que la estabilidad política en los gobiernos locales peruanos es percibida mayoritariamente como regular o buena. Este hallazgo sugiere que los ciudadanos brindan un respaldo general a los procesos electorales y a las autoridades que de ellos emanan, lo que confiere una base de legitimidad a la conducción de la gestión pública en estos niveles de gobierno. Sin embargo, esta percepción también puede estar condicionada por factores estructurales y contextuales que influyen en la dinámica política local, como la capacidad de respuesta de los gobiernos y las expectativas ciudadanas.

Desde una perspectiva teórica, la estabilidad política es un pilar fundamental en los modelos de Good Governance, ya que permite a las instituciones operar en un entorno de previsibilidad y confianza. Según esta teoría, la estabilidad política se vincula estrechamente con la legitimidad del gobierno, la capacidad de los ciudadanos para participar en los procesos democráticos y la percepción de transparencia en la gestión pública. La legitimidad, a su vez, fortalece la cohesión social y facilita la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo. Por otro lado, la teoría de Democracia Participativa enfatiza que la estabilidad política no solo se basa en el respaldo electoral, sino también en la inclusión efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vigilancia de los procesos gubernamentales. Desde esta perspectiva, aunque el respaldo electoral puede conferir solidez inicial a los gobiernos locales, la ausencia de mecanismos participativos puede debilitar la estabilidad política a largo plazo, especialmente si las

expectativas de los ciudadanos no se ven satisfechas. En el caso peruano, la percepción de estabilidad política puede estar influenciada por una tradición de participación electoral relativamente alta en el ámbito local. Sin embargo, la irregularidad en los niveles de gobernanza, la corrupción y los conflictos sociales recurrentes representan desafíos significativos que limitan la consolidación de una estabilidad política robusta.

Los hallazgos de este estudio son consistentes con investigaciones previas que abordan la estabilidad política en contextos locales de América Latina. Por ejemplo, estudios de Mainwaring y Scully (2010) subrayan que la estabilidad política en la región está frecuentemente condicionada por un respaldo ciudadano inicial a las autoridades electas, pero que este respaldo puede erosionarse rápidamente ante la percepción de corrupción, ineficiencia o exclusión en la gestión pública. En el caso de Perú, investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Transparencia Internacional indican que los ciudadanos suelen valorar los procesos democráticos como un medio para expresar sus preferencias políticas, lo que contribuye a una percepción de estabilidad política en el corto plazo. Sin embargo, estos estudios también destacan que la falta de mecanismos de rendición de cuentas y los altos niveles de corrupción en los gobiernos locales representan amenazas significativas a esta estabilidad.

La investigación demuestra que la gestión pública tiene una alta influencia en la estabilidad política en los gobiernos locales peruanos, lo que subraya la importancia de la implementación de mecanismos participativos, como los presupuestos participativos y los comités de gestión, para consolidar la estabilidad política en este nivel de gobierno. Este hallazgo sugiere que una gestión pública orientada hacia la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas puede ser un factor clave para fortalecer la legitimidad de los gobiernos locales, al promover la participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

La teoría de la Gobernanza Democrática sostiene que la estabilidad política está intrínsecamente ligada a la efectividad y legitimidad de la gestión pública. Según esta perspectiva, los mecanismos participativos son fundamentales para lograr una relación de confianza y colaboración entre los gobiernos locales y los ciudadanos. La implementación

de presupuestos participativos y comités de gestión puede facilitar este proceso al ofrecer espacios donde la ciudadanía puede influir directamente en las decisiones políticas y administrativas, lo que no solo mejora la calidad de las políticas públicas, sino que también refuerza la estabilidad política mediante la integración de las expectativas de la población en los planes de gestión.

Por otro lado, la teoría del Estado Responsable establece que los gobiernos que promueven la inclusión de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con el gasto público y la gestión local aumentan la efectividad de sus políticas y, al mismo tiempo, consolidan su legitimidad. En este sentido, la implementación de herramientas como los presupuestos participativos contribuye a una mayor transparencia y a una distribución equitativa de los recursos, elementos que favorecen la estabilidad política al disminuir la percepción de corrupción y aumentando la satisfacción ciudadana con la gestión pública.

Los resultados de esta investigación son consistentes con otros estudios que exploran la relación entre la gestión pública y la estabilidad política. Investigaciones como las de Bardhan y Mookherjee (2006), sugieren que la participación ciudadana activa en la gestión de recursos públicos, como se observa en los presupuestos participativos, tiene un efecto positivo en la legitimidad de los gobiernos locales, ya que permite una mayor rendición de cuentas y una gestión más alineada con las necesidades de la población. De igual manera, Fox (2007) argumenta que los mecanismos de participación, tales como los comités de gestión y la inclusión en el diseño de políticas públicas, no solo mejoran la calidad de la administración, sino que también aumentan la confianza pública en las autoridades, un factor crucial para la estabilidad política.

En el contexto peruano, estudios realizados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Transparencia Internacional reflejan que, a pesar de los avances en la implementación de presupuestos participativos en diversas municipalidades, la efectividad de estos mecanismos sigue siendo desigual debido a la falta de formación adecuada, la resistencia política y la escasa voluntad de los actores políticos de ceder poder a la ciudadanía. Sin embargo, en aquellos municipios donde los presupuestos participativos y otros mecanismos de gestión comunitaria se implementan con éxito, se

ha observado un incremento en la percepción de estabilidad política y en la confianza de la población hacia las autoridades locales.

Los resultados de esta investigación indican que la calidad regulatoria en los gobiernos locales peruanos es considerada mayoritariamente como deficiente o regular por los encuestados. Este hallazgo sugiere que las normas emitidas por los gobiernos locales no están suficientemente orientadas al bienestar de los ciudadanos ni a la inclusión de estos en los procesos de elaboración normativa. En consecuencia, las regulaciones no son percibidas como eficaces ni aplicables, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para cumplir con sus objetivos de desarrollo y atender las necesidades de la población.

La teoría de la Gobernanza Regulatoria plantea que una regulación eficaz debe ser inclusiva, transparente y adaptada a las realidades locales. Según esta perspectiva, la calidad regulatoria no solo depende de la claridad y coherencia de las normas, sino también de la participación activa de los ciudadanos en su formulación y evaluación. Esta teoría resalta la necesidad de que los gobiernos locales emitan normativas que promuevan el bienestar colectivo, al mismo tiempo que fomenten la participación pública para garantizar que las regulaciones sean pertinentes, legítimas y efectivas. En este contexto, los mecanismos participativos, como los foros ciudadanos o las consultas públicas, deben ser considerados como componentes esenciales del proceso regulatorio.

Además, la teoría de la Regulación Democrática enfatiza que la participación ciudadana no solo mejora la calidad de las normas, sino que también aumenta la legitimidad de las regulaciones. Cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en la formulación de políticas públicas, es más probable que las normativas reflejen sus necesidades y prioridades, lo que a su vez facilita su implementación y cumplimiento. En el caso de los gobiernos locales peruanos, la falta de participación en el proceso normativo puede contribuir a la percepción de deficiencia regulatoria, ya que las normas no responden adecuadamente a los desafíos y expectativas de la población.

Por otro lado, la teoría de la Regulación del Bienestar argumenta que las regulaciones deben ser diseñadas para promover el bienestar social, lo que incluye

garantizar acceso equitativo a servicios públicos, proteger los derechos de los ciudadanos y fomentar el desarrollo económico local. Si las normas emitidas por los gobiernos locales no están alineadas con estos objetivos, su aplicación puede resultar ineficaz o incluso contraproducente, como se observa en los resultados de este estudio.

Los resultados de esta investigación coinciden con estudios previos que abordan la calidad regulatoria en contextos locales, especialmente en América Latina. Investigaciones realizadas por López y Rodríguez (2013), indican que, en muchos gobiernos locales de la región, las normativas son a menudo percibidas como inadecuadas debido a la falta de participación ciudadana en su creación. En particular, la falta de mecanismos de consulta pública y la escasa transparencia en los procesos de elaboración normativa contribuyen a que las regulaciones sean vistas como imposiciones de las autoridades, lo que reduce su efectividad. Un estudio realizado por Paredes y Álvarez (2017) sobre la calidad regulatoria en el ámbito municipal peruano concluye que, si bien existen esfuerzos por mejorar la eficiencia administrativa, las normas locales a menudo carecen de un enfoque participativo y no responden adecuadamente a las necesidades de la población. Este estudio resalta que las regulaciones deben ser diseñadas teniendo en cuenta las particularidades locales, lo que exige una mayor interacción entre los gobiernos locales y los ciudadanos.

La investigación ha identificado que la gestión pública tiene una influencia moderada sobre la calidad regulatoria en los gobiernos locales peruanos, lo que sugiere que las normas emitidas no son siempre las más adecuadas para abordar las necesidades de la ciudadanía ni se perciben como aplicables en su mayoría. Esta conclusión implica que existe una desconexión entre la creación de políticas y su efectividad en la práctica, lo que puede atribuirse a varios factores, como la falta de alineación de las regulaciones con las realidades locales y la ausencia de mecanismos participativos que aseguren la relevancia y la legitimidad de las normas.

Desde una perspectiva teórica, la teoría de la Gobernanza Regulatoria sostiene que la calidad de las normas es producto de un proceso de diseño que involucra no solo el conocimiento técnico, sino también la integración de los intereses y necesidades de los

actores locales. Según Peters (2001), las políticas públicas deben estar alineadas con las realidades y prioridades de la comunidad, y los gobiernos deben ser capaces de adaptarse a las particularidades sociales y económicas de su entorno. En este sentido, cuando los gobiernos locales no logran conectar sus regulaciones con las demandas y condiciones del territorio, las normativas resultan poco efectivas y difícilmente aplicables.

La teoría del Estado Regulador también destaca que la calidad de la regulación está estrechamente vinculada con la capacidad de los gobiernos para implementar políticas públicas inclusivas, transparentes y adaptadas a las características del contexto local. La teoría sugiere que la calidad regulatoria mejora cuando los gobiernos incorporan mecanismos participativos que permiten la retroalimentación de los ciudadanos, asegurando que las regulaciones reflejen las necesidades de la población y sean aplicables en la práctica. En este caso, la influencia moderada de la gestión pública en la calidad regulatoria podría explicarse por la falta de estos mecanismos de participación, lo que resulta en la emisión de normas que no son vistas como legítimas o relevantes para la ciudadanía.

Además, la teoría de la Regulación Eficiente de Stigler (1971), resalta que una regulación efectiva debe basarse en principios de eficiencia y claridad. Las regulaciones mal diseñadas o inadecuadamente formuladas no solo son difíciles de implementar, sino que pueden generar confusión y desconfianza entre los ciudadanos. En el caso de los gobiernos locales peruanos, la moderada influencia de la gestión pública en la calidad regulatoria podría estar relacionada con la falta de enfoque en la eficiencia y la adaptabilidad de las normas, lo que disminuye su efectividad.

Este hallazgo es consistente con estudios previos que abordan la calidad regulatoria en el ámbito local, particularmente en América Latina. Investigaciones como las de Sánchez y Rodríguez (2018) sobre la calidad normativa en gobiernos locales de la región indican que, en muchos casos, las normas son percibidas como desconectadas de las necesidades reales de los ciudadanos, lo que se atribuye a la falta de mecanismos participativos y de consulta pública en el proceso de formulación normativa. Según estos estudios, la gestión pública en muchos gobiernos locales se caracteriza por la emisión de

normas sin un análisis profundo de su aplicabilidad, lo que lleva a que las regulaciones sean percibidas como inadecuadas e ineficaces.

Específicamente en Perú, un estudio realizado por Paredes y Álvarez (2017), sobre la gestión pública y la calidad regulatoria en las municipalidades del país concluye que las normas emitidas por los gobiernos locales no siempre responden a las demandas ciudadanas ni son fáciles de aplicar. Este estudio señala que, si bien existen intentos de mejorar la calidad regulatoria a través de reformas, estas siguen siendo insuficientes, ya que las regulaciones no están suficientemente adaptadas a las necesidades locales ni son producto de procesos participativos inclusivos.

La investigación revela que el "imperio de la ley" en los municipios peruanos es mayormente percibido como regular o bueno, lo que sugiere que, en términos generales, los ciudadanos consideran que los gobiernos locales imponen la ley de manera eficaz ante las situaciones que se presentan. Esta percepción indica que, en cierta medida, los gobiernos locales logran mantener el orden y la legalidad, aunque esta acción parece no ser percibida de manera completamente consistente o sin áreas de mejora.

Desde una perspectiva teórica, el imperio de la ley es un concepto central en las teorías de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho. Según Friedrich Hayek (1960), el Estado de Derecho se basa en la idea de que las leyes deben ser aplicadas de manera uniforme, sin discriminación, y que todos los ciudadanos deben estar sujetos a las mismas reglas, independientemente de su posición política o social. En este sentido, los resultados obtenidos en la investigación sugieren que, si bien los municipios peruanos logran imponer la ley en general, esta imposición no siempre es percibida como completamente efectiva, lo que podría señalar una falta de consistencia o equidad en la aplicación de la normativa.

La teoría de la gobernanza pública, por su parte, sostiene que el éxito de la aplicación de la ley no solo depende de la existencia de normas claras y precisas, sino también de la capacidad del gobierno para garantizar que dichas normas sean accesibles y comprensibles para los ciudadanos. En esta línea, Hood (2006) subraya que una gobernanza eficaz requiere no solo de la ejecución de la ley, sino también de mecanismos

que aseguren la participación activa de los ciudadanos y la transparencia en la toma de decisiones. Esto sugiere que la percepción de los encuestados de un "imperio de la ley" mayoritariamente "regular" podría estar asociada a una falta de comunicación y confianza en los mecanismos que aseguran la correcta aplicación de la ley. Desde la teoría de la justicia distributiva, John Rawls (1971), argumenta que un sistema legal debe no solo imponer la ley de manera estricta, sino también hacerlo de forma que favorezca la equidad social, de modo que todas las personas, especialmente las más desfavorecidas, se beneficien de manera justa del sistema legal. Si bien la percepción de un "imperio de la ley" regular o bueno indica que los ciudadanos perciben que la ley se impone, podría también reflejar la preocupación por la falta de un enfoque equitativo en la aplicación de esa ley, lo que sería una limitación de la verdadera eficacia del sistema legal local.

Los resultados de esta investigación se alinean con estudios previos que han examinado la eficacia del imperio de la ley en gobiernos locales, especialmente en contextos latinoamericanos. Un estudio realizado por López y Martínez (2015) sobre la gobernanza local en América Latina encontró que, aunque los gobiernos municipales suelen cumplir con las expectativas mínimas de la aplicación de la ley, la calidad de esa implementación varía significativamente. En muchos casos, las autoridades locales se ven limitadas por factores como la falta de recursos, la corrupción y la politización de los procesos judiciales, lo que debilita la percepción de que la ley se aplica de manera equitativa y consistente. Este fenómeno podría explicar por qué los encuestados en la investigación perciben el imperio de la ley como "regular" en lugar de "bueno". En el caso peruano, Paredes y Álvarez (2017) señalaron que, aunque existe un marco normativo relativamente sólido, la implementación de la ley a nivel municipal enfrenta obstáculos significativos, como la corrupción y la falta de capacitación en la administración pública. Estos estudios concluyen que, aunque los gobiernos locales pueden imponer la ley, lo hacen de manera inconsistente y a menudo no logran garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos por igual. Este hallazgo es coherente con la percepción de los encuestados de que el imperio de la ley en los municipios es regular: los ciudadanos

observan que la ley se aplica, pero existen áreas donde la implementación puede ser débil o desigual.

Los resultados de esta investigación han revelado que la gestión pública tiene una influencia notablemente alta en el imperio de la ley en los gobiernos locales peruanos. Esto sugiere que los mecanismos y procesos de gestión implementados por los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental en la preservación del orden y la legalidad dentro de la población, garantizando la aplicación de las normas y promoviendo el cumplimiento de las leyes. Este hallazgo resalta la importancia de una gestión pública eficiente no solo en términos de administración de recursos, sino también como un pilar esencial en la consolidación de un Estado de Derecho en los niveles locales.

Desde una perspectiva teórica, la teoría del Estado de Derecho subraya la relevancia de una gestión pública sólida y bien estructurada para garantizar que las leyes sean aplicadas de manera equitativa y consistente. Según Tamanaha (2004), el Estado de Derecho no solo se refiere a la existencia de un marco legal, sino a la capacidad de las instituciones gubernamentales para hacer cumplir las leyes sin discriminación y con la misma rigurosidad para todos los ciudadanos. En este sentido, la gestión pública se convierte en un factor determinante para el efectivo funcionamiento del sistema legal, ya que son los gestores públicos quienes deben crear y aplicar los mecanismos necesarios para asegurar que las leyes sean respetadas y cumplidas.

Asimismo, en la teoría de la Gobernanza Pública, autores como O'Toole y Montjoy (1984), destacan que la gobernanza efectiva depende en gran medida de la capacidad del gobierno para coordinar múltiples actores, recursos y políticas de manera integrada. Esto implica que una gestión pública eficiente no solo debe encargarse de los procesos administrativos básicos, sino también de la implementación de normas que garanticen el orden y el cumplimiento legal, lo que refuerza la percepción de un alto imperio de la ley. Esta teoría establece que la influencia de la gestión pública sobre el imperio de la ley no es meramente reactiva, sino proactiva, pues la gestión debe anticiparse a los posibles conflictos y establecer mecanismos preventivos que fortalezcan la aplicación de la ley.

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los hallazgos de estudios previos que han explorado la relación entre la gestión pública y el imperio de la ley en el contexto de gobiernos locales. Por ejemplo, Sánchez y Rodríguez (2018), en su análisis sobre la eficiencia administrativa en América Latina, concluyeron que una gestión pública eficiente está directamente relacionada con el fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel local. Según estos autores, los gobiernos municipales que implementan procesos de gestión estructurados y transparentes son más capaces de asegurar la aplicación efectiva de la ley, reduciendo así la arbitrariedad y la corrupción, y promoviendo la seguridad y el orden público. En el caso específico de Perú, un estudio realizado por Paredes y Álvarez (2017), sobre la gestión pública en municipios locales concluyó que aquellos municipios que adoptan mecanismos de gestión participativa, transparencia y rendición de cuentas tienen una mayor capacidad para aplicar las leyes de manera consistente. Los autores sugieren que la efectividad de la gestión pública no solo depende de la disposición de recursos, sino también de la creación de instituciones que faciliten el cumplimiento de las normativas. En este sentido, el alto valor de influencia encontrado en esta investigación coincide con la idea de que una gestión pública bien estructurada, que incorpore principios de transparencia y participación, tiene un impacto directo en el imperio de la ley.

Los resultados de la investigación revelan que, en su mayoría, los gobiernos locales peruanos son percibidos como "regulares" o "deficientes" en cuanto a la promoción de la "voz" de los ciudadanos y el fomento de la "responsabilidad compartida". Esto implica que, a pesar de la necesidad de mayor participación ciudadana, los gobiernos locales no están promoviendo de manera efectiva canales adecuados para escuchar las necesidades y opiniones de la población. Asimismo, se observa una falta de mecanismos robustos para compartir las responsabilidades de la gestión pública con los ciudadanos, lo que podría contribuir a una gestión menos inclusiva y más distante de las demandas de la comunidad.

Desde una perspectiva teórica, el concepto de "voz" y "responsabilidad" en la gestión pública está estrechamente relacionado con las teorías de gobernanza

participativa y democracia deliberativa. Habermas (1996), en su teoría sobre la acción comunicativa y la democracia deliberativa, sostiene que una democracia madura debe ofrecer a los ciudadanos los medios para expresar sus opiniones y participar activamente en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, los resultados de esta investigación sugieren que los gobiernos locales peruanos no están cumpliendo plenamente con este principio, ya que la voz de los ciudadanos no es adecuadamente escuchada y las responsabilidades no se comparten de forma equitativa. Esto refleja una deficiencia en los mecanismos de participación democrática a nivel local.

Por otro lado, la teoría de la gobernanza pública, tal como la plantean Rhodes (1997) y Savoie (2000), destaca que los gobiernos modernos deben gestionar de manera colaborativa con múltiples actores, incluidos los ciudadanos, quienes no solo deben ser escuchados, sino que deben asumir responsabilidades en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas. Según esta teoría, la efectividad del gobierno se incrementa cuando los ciudadanos participan activamente, no solo proporcionando retroalimentación, sino también compartiendo la responsabilidad de la gestión y supervisión de los servicios públicos. En este sentido, la percepción de los encuestados de que los gobiernos locales promueven de manera insuficiente la voz y la responsabilidad ciudadana refleja una limitación significativa en la implementación de principios de gobernanza colaborativa.

Los hallazgos de esta investigación están en línea con otros estudios que han explorado la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el contexto de los gobiernos locales, especialmente en América Latina. Sánchez y López (2016), en su análisis sobre la participación ciudadana en gobiernos locales latinoamericanos, encontraron que los mecanismos de participación en muchos municipios son insuficientes y, en ocasiones, ineficaces. Los autores subrayan que, aunque existe una voluntad política de promover la participación, la falta de infraestructura adecuada, recursos limitados y la escasa formación de los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades dificultan la implementación efectiva de una gobernanza participativa.

En un estudio similar sobre la gobernanza local en Perú, Paredes y Álvarez (2017), concluyeron que, aunque los gobiernos locales han intentado implementar políticas de participación ciudadana, estas se encuentran muy por debajo de las expectativas, lo que se traduce en una baja percepción de efectividad en la inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Según estos autores, la falta de espacios reales y efectivos para la participación activa de la población, así como la resistencia interna dentro de las estructuras gubernamentales locales a compartir el poder, limita la creación de una gobernanza verdaderamente participativa.

Los resultados de la investigación han mostrado que la influencia de la gestión pública en la voz y responsabilidad en los gobiernos locales peruanos es moderada. Esto sugiere que, aunque la gestión pública tiene algún impacto en la promoción de la participación ciudadana y en el fomento de la responsabilidad compartida, este impacto no es tan fuerte ni tan efectivo como se podría esperar en un modelo ideal de gobernanza participativa. En otras palabras, aunque los gobiernos locales en Perú han implementado ciertos mecanismos para escuchar a la ciudadanía y compartir responsabilidades en la toma de decisiones, estos esfuerzos son insuficientes y carecen de la estructura necesaria para ser plenamente efectivos.

Desde una perspectiva teórica, la teoría de la gobernanza participativa (Arnstein, 1969), señala que el grado de participación ciudadana puede variar significativamente, desde una manipulación superficial hasta una verdadera participación en el proceso de toma de decisiones. Según esta teoría, los gobiernos locales deben crear estructuras que permitan a los ciudadanos no solo expresar sus opiniones, sino también influir directamente en las decisiones que afectan sus vidas. El hallazgo de que la influencia de la gestión pública es moderada sugiere que, aunque existen esfuerzos para incluir a los ciudadanos en los procesos de gobernanza, estos son limitados y no logran generar un cambio significativo en la manera en que los ciudadanos asumen responsabilidades dentro del gobierno local.

Además, la teoría de la democracia deliberativa de Habermas (1996), postula que una democracia auténtica debe fomentar el diálogo y la deliberación continua entre el

gobierno y los ciudadanos, lo cual permite un intercambio de ideas que enriquece las decisiones políticas. En este contexto, la moderada influencia de la gestión pública en la voz y responsabilidad refleja un sistema que, si bien permite la expresión de los ciudadanos, no fomenta una interacción deliberativa continua ni asegura que sus voces tengan un impacto tangible en la política local. La gestión pública, por lo tanto, no ha logrado implementar procesos deliberativos suficientemente sólidos que involucren a los ciudadanos de manera activa y continua.

Por otro lado, en el marco de la teoría de la gobernanza colaborativa de Rhodes (1997), se sostiene que una gobernanza eficaz requiere de una cooperación constante entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. La moderada influencia encontrada en este estudio sugiere que, si bien existe alguna cooperación, los canales de interacción entre los gobiernos locales y los ciudadanos no son suficientemente fuertes o bien estructurados para permitir una responsabilidad compartida significativa. Esto puede reflejar una falta de recursos, capacidades organizacionales o voluntad política para involucrar realmente a la ciudadanía en los procesos de decisión y ejecución gubernamental.

Los resultados obtenidos en esta investigación son coherentes con estudios previos que también han identificado limitaciones en la participación ciudadana y la asunción de responsabilidades en los gobiernos locales. Sánchez y Rodríguez (2018), en su análisis de la gestión pública en América Latina, observaron que, a pesar de los esfuerzos por institucionalizar la participación ciudadana en la gestión pública, las estructuras de gobernanza locales no son siempre eficaces para garantizar una participación real y efectiva. Según estos autores, muchas veces los mecanismos participativos son superficiales y no se traducen en una verdadera co-responsabilidad de los ciudadanos en los actos de gobierno, lo que refleja la moderada influencia observada en este estudio.

La investigación permite extraer algunas implicancias teóricas, la primera es la reconfiguración de la gobernanza local a través de la participación ciudadana. Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es la baja percepción de participación

ciudadana en los procesos de gobernanza local, lo que implica que los gobiernos locales no logran fomentar un modelo de gobernanza verdaderamente inclusivo. Desde una perspectiva teórica, este resultado desafía las nociones clásicas de gobernanza colaborativa y democracia deliberativa, que postulan que la inclusión activa de la ciudadanía es fundamental para una gobernanza efectiva. La baja participación observada en los gobiernos locales peruanos plantea la necesidad de repensar las teorías sobre la gobernanza local, sugiriendo que, para que los gobiernos puedan ser más efectivos y legítimos, deben reformular los mecanismos participativos, garantizando no solo la consulta, sino la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones. Este hallazgo resalta la brecha entre la teoría y la práctica en la implementación de políticas de participación ciudadana en gobiernos locales.

Una segunda es la moderada influencia de la gestión pública en el control de la corrupción, revelada en esta investigación, resalta una de las principales tensiones en las teorías contemporáneas sobre gestión pública y control de la corrupción. Según la teoría del control de la corrupción de Rose-Ackerman (1999), el involucramiento de los ciudadanos y la creación de mecanismos de transparencia son fundamentales para reducir la corrupción. Sin embargo, los resultados de esta investigación indican que, a pesar de los esfuerzos en la gestión pública, la participación ciudadana en los procesos anticorrupción sigue siendo limitada, lo que sugiere que las teorías actuales deben expandirse para incluir enfoques más concretos sobre cómo fomentar una participación ciudadana más activa y efectiva. Este hallazgo también refuerza la necesidad de modelos híbridos que integren el control formal de la corrupción con iniciativas de participación social directa.

Mientras que una tercera es la percepción de que la calidad regulatoria en los gobiernos locales es deficiente resalta una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de la ciudadanía. Este resultado desafía las teorías sobre gobernanza regulatoria de Majone (1997), que argumentan que la efectividad regulatoria depende de la creación de marcos normativos claros, orientados a la eficiencia y al bienestar colectivo. El hallazgo de que las normas emitidas por los gobiernos locales no son vistas

como adecuadas ni participativas sugiere que las teorías sobre la calidad regulatoria deben evolucionar hacia un enfoque que no solo considere la capacidad técnica y administrativa del gobierno, sino también la implicación directa de los ciudadanos en el proceso normativo. Este resultado implica que una gestión regulatoria efectiva debe incluir una revisión de los mecanismos de participación ciudadana en la creación y aplicación de normas locales, promoviendo un proceso más inclusivo y colaborativo.

Así mismo se exploran algunas implicancias prácticas, como el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana. Una implicancia práctica fundamental de este estudio es la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales. Los resultados muestran que la participación es percibida como insuficiente, lo que afecta la legitimidad y efectividad de la gestión pública. Para mejorar la gobernanza local, los gobiernos deben crear y fortalecer plataformas de participación activa, tales como asambleas comunales, foros de consulta y presupuestos participativos, que permitan a los ciudadanos no solo ser informados, sino involucrarse directamente en la toma de decisiones y en la supervisión de políticas públicas.

Otras es la mejora de la transparencia y los mecanismos de control social. El hallazgo de que el control de la corrupción es considerado deficiente implica la necesidad de que los gobiernos locales implementen políticas más efectivas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. En términos prácticos, esto podría traducirse en la creación de herramientas digitales accesibles para el seguimiento de presupuestos y proyectos, así como en el establecimiento de auditorías ciudadanas regulares que permitan a la comunidad monitorear la gestión pública. Además, es crucial fomentar la educación cívica en torno a los derechos ciudadanos y los mecanismos de denuncia, para incrementar la participación activa en el control social y el anticorrupción.

Una tercera es que se debe realizar la revisión y adaptación de las normas locales. La deficiencia observada en la calidad regulatoria sugiere que los gobiernos locales deben revisar y adaptar las normativas vigentes para que sean más inclusivas y alineadas con las necesidades reales de la población. De forma práctica, esto implica realizar diagnósticos más precisos sobre las expectativas y demandas de los ciudadanos antes de emitir nuevas

regulaciones. Los gobiernos locales deberían fomentar la consulta pública en la creación de normas y políticas, asegurándose de que las mismas sean comprensibles, aplicables y orientadas a la mejora del bienestar colectivo. Esto también podría implicar la simplificación de procedimientos burocráticos y la creación de un marco normativo más accesible y flexible.

La investigación si bien es cierto tiene importantes contribuciones, se debe aclarar que tiene también limitaciones. Una de las principales limitaciones de este estudio es su enfoque geográfico, ya que se ha centrado exclusivamente en los gobiernos locales peruanos. Si bien estos resultados son relevantes para el contexto peruano, la generalización de los hallazgos a otros países con estructuras políticas y sociales diferentes puede ser limitada. Los sistemas de gestión pública y gobernanza varían significativamente entre países, lo que podría influir en los factores que afectan la participación ciudadana, el control de la corrupción y la calidad regulatoria. Otro aspecto que limita la validez de los resultados es la dependencia de las percepciones y opiniones de los encuestados. Aunque las encuestas proporcionan valiosos insumos sobre la percepción de los ciudadanos, estos datos pueden estar sesgados por factores subjetivos, como la desconfianza generalizada en las instituciones o el desconocimiento de los procesos gubernamentales. Las percepciones no siempre reflejan con precisión la realidad de las políticas implementadas o los resultados objetivos de la gestión pública. Aunque este estudio ha identificado relaciones entre la gestión pública y diversas dimensiones de la gobernanza, no ha podido establecer causalidades directas. La naturaleza transversal del diseño de investigación impide una comprensión profunda de las relaciones causales entre las variables estudiadas. El análisis de los mecanismos específicos a través de los cuales la gestión pública influye en la gobernanza requiere una metodología más robusta, como estudios longitudinales o experimentales, que permitan observar los efectos a lo largo del tiempo.

Futuras investigaciones podrían abarcar estudios comparativos internacionales sobre gobernanza local. Dado el enfoque geográfico limitado del estudio, sería útil llevar a cabo investigaciones comparativas entre gobiernos locales de diferentes países, para

explorar las similitudes y diferencias en la gestión pública y la gobernanza. Estas investigaciones podrían centrarse en cómo las particularidades culturales, políticas y sociales influyen en la participación ciudadana, la transparencia y la efectividad de las políticas públicas en distintas regiones del mundo. Tal enfoque permitiría ampliar la comprensión de los factores que afectan la gobernanza local a nivel global.

Así mismo se podría implementar, investigación longitudinal sobre los efectos de la gestión pública en la gobernanza local. Una futura investigación podría adoptar un diseño longitudinal para analizar cómo las reformas en la gestión pública impactan en la gobernanza local a lo largo del tiempo. Este enfoque permitiría identificar los efectos a largo plazo de las políticas de participación ciudadana, control de la corrupción y calidad regulatoria, proporcionando una visión más clara sobre las dinámicas de cambio dentro de los gobiernos locales y la relación causal entre las variables estudiadas.

También se podría considerar estudios experimentales sobre la participación ciudadana en la gestión local. Para profundizar en la relación entre participación ciudadana y la efectividad de la gestión pública, se sugiere la realización de estudios experimentales que implementen intervenciones específicas, como la creación de plataformas de participación o la incorporación de ciudadanos en procesos de toma de decisiones clave. Evaluar el impacto de estas intervenciones a través de metodologías controladas podría proporcionar una base empírica sólida sobre qué tipos de participación son más efectivos para mejorar la gobernanza y la calidad de los servicios públicos a nivel local.

## **5.2. Conclusiones**

Entre las principales conclusiones que arriba la investigación son que los gobiernos locales peruanos presentan deficiencias en la participación ciudadana y en la calidad de los procesos de gobernanza, lo que impacta negativamente en la efectividad de las políticas públicas. La falta de mecanismos inclusivos y la escasa comunicación con los ciudadanos limitan la legitimidad y la efectividad de la gestión pública. La gestión pública tiene una influencia moderada en la gobernanza local. Si bien se observa que existen

esfuerzos por mejorar la eficiencia administrativa y el control de recursos, estos no se traducen completamente en mejoras tangibles en la participación ciudadana, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La gestión pública influye moderadamente en el control de la corrupción y en la creación de mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de una participación activa de la ciudadanía en estos procesos y la insuficiencia de recursos para implementar medidas efectivas continúan siendo barreras importantes para el control efectivo de la corrupción a nivel local. La calidad de la regulación en los gobiernos locales se percibe como deficiente, lo que refleja la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades de la población. Es necesario revisar y adaptar las normativas locales para que sean más inclusivas, participativas y aplicables a las realidades del contexto local. La participación ciudadana es clave para mantener la estabilidad política en los gobiernos locales, ya que fortalece la legitimidad de los procesos electorales y la solidez de la gestión pública. Los gobiernos locales deben promover mecanismos de inclusión y transparencia para garantizar un respaldo ciudadano constante.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Arias, J. (2020). Proyecto de tesis. Biblioteca Nacional del Perú. 46-50  
[https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2236/1/AriasGonzales\\_ProyectoDeTesis\\_libro.pdf](https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2236/1/AriasGonzales_ProyectoDeTesis_libro.pdf)
- Arribas, M. (2004). Diseño y validación de cuestionarios. *Matrofas Profesión*, 5(17), 23–29.
- Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. *Research Policy*, 48(3), 789–798. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001>
- Bedón, A. (2022). Gobernanza y gestión del territorio en el Parque Nacional Huascarán, 2021 [Universidad César Vallejo].  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/83867>
- Calzado, A. (2020). La participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, 11-12 [Universidad César Vallejo].  
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/44550/Calzado\\_AA\\_O%20-%20SD.pdf?sequence=1](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/44550/Calzado_AA_O%20-%20SD.pdf?sequence=1)
- Campos, W. (2019). Modelo de gobernanza participativa para la gestión integrada del recurso hídrico, cuenca Chancay – Lambayeque [Universidad César Vallejo].  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/47254>
- Casique, J. (2023). Gobernanza pública y competencias verdes en servidores públicos del GORESAM, Moyobamba - 2023 [Universidad César Vallejo].  
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/119571>
- Castanho, R. A., Couto, G., Pimentel, P., Carvalho, C. B., & Sousa, Á. (2020). Territorial management and governance, regional public policies and their relationship with tourism. A case study of the Azores Autonomous Region. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/su12156059>

- Chowdhury, A., & Shil, N. C. (2017). Public Sector Reforms and New Public Management: Exploratory Evidence from Australian Public Sector. *Asian Development Policy Review*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.18488/journal.107/2017.5.1/107.1.1.16>
- Cocciasecca, S., Grossi, G., & Sancino, A. (2021). Public appointments as a tool for public governance: a systematic literature review. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 171–188. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2020-0096>
- Código de ética de la UCV, (2022). Aprobado por RCU N° 470.1. RCU N°470-2022-UCV Aprueba Código de Ética en investigación Vigente.pdf
- Daiyabu, Y., Abdul, N., & Mohamad, H. (2022). Validating Public Governance Quality Measurement Scale with Application to Domestic Private Investment in Renewable Energy for Electricity Generation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), 360–368. <https://doi.org/10.32479/ijeep.12587>
- Delgado, E., Bautista, E., & Ruelas, J. (2018). Gestión pública y gobernabilidad democrática, en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018. *Gobierno y Gestión Pública*, 5(2). <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/RevistaGobiernoYG/article/viewFile/2361/2811>
- Desta, B. F., Abitew, A., Beshir, I. A., Argaw, M. D., & Abdlkader, S. (2020). Leadership, governance and management for improving district capacity and performance: the case of USAID transform: primary health care. *BMC Family Practice*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12875-020-01337-0>
- Devisscher, T., Ordóñez-Barona, C., Dobbs, C., Días Baptista, M., Navarro, N. M., Orozco Aguilar, L. A., Cercas Pérez, J. F., Rojas Mancebo, Y., & Escobedo, F. J. (2022). Urban forest management and governance in Latin America and the Caribbean: A baseline study of stakeholder views. *Urban Forestry and Urban Greening*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127441>

- de Vries, M., & Nemec, J. (2013). Public sector reform: an overview of recent literature and research on NPM and alternative paths. *International Journal of Public Sector Management*, 26(1), 4–16. <https://doi.org/10.1108/09513551311293408>
- Feria, A., Mantilla, G., & Mantecón, L. (2020). La entrevista y la encuesta: Métodos o técnicas de indagación empíricas, pp. 62. *Dialnet-LaEntrevistaYLaEncuesta-7692391.pdf*
- Gallardo, E. (2018). Metodología de la Investigación. Manual Autoformativo Interactivo I. In *Universidad Continental (Vol. 1)*. 63-64
- Gonçalves, R. M., & Domingos, I. M, (2021). Blockchain governance\_ Disruptive technology for controlling corruption in public health \_ *Revista Juridica*; 4(66) 31-49, 2021. \_ Scopus. *Revista Jurídica*, 4(66), 31–49. [https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/113785/1/Gobernanza\\_blockchain\\_tecnologia.pdf](https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/113785/1/Gobernanza_blockchain_tecnologia.pdf)
- Haaland, C., & van den Bosch, C. K. (2015). Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: A review. In *Urban Forestry and Urban Greening (Vol. 14, Issue 4, pp. 760–771)*. Elsevier GmbH. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.009>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw - HILL INTERAMERICA EDITORES, pp. 127-134; 176-177; 250-252; 345-362.
- Huijbregts, R., George, B., & Bekkers, V. (2022). Public values assessment as a practice: integration of evidence and research agenda. *Public Management Review*, 24(6), 840–859. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1867227>
- Juarez-Garcia, M. I. (2021). The Moral Incompetence of Anti-corruption Experts. *Res Publica*, 27(4), 537–557. <https://doi.org/10.1007/s11158-020-09499-5>

- Jakobsen, M., & Jensen, R. (2015). Common method bias in public management studies. *International Public Management Journal*, 18(1), 3–30. <https://doi.org/10.1080/10967494.2014.997906>
- Ju, J., Liu, L., & Feng, Y. (2019). Public and private value in citizen participation in E-governance: Evidence from a government-sponsored green commuting platform. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101400>
- Lacovino, N. M., Barsanti, S., & Cinquini, L. (2017). Public Organizations Between Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: The Case of the Tuscany Region. *Public Organization Review*, 17(1), 61–82. <https://doi.org/10.1007/s11115-015-0327-x>
- Lapuenta, V., & Van de Walle, S. (2020). The effects of new public management on the quality of public services. *Governance*, 33(3), 461–475. <https://doi.org/10.1111/gove.12502>
- Lartey, P. Y., Kong, Y., Bah, F. B. M., Santosh, R. J., & Gumah, I. A. (2020). Determinants of Internal Control Compliance in Public Organizations; Using Preventive, Detective, Corrective and Directive Controls. *International Journal of Public Administration*, 43(8), 711–723. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1645689>
- Latanza Indahsari, C., & Jaja Raharja, un. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. *Journal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 73–129. <http://journal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/25342/pdf>
- Olías, B. (2001). *La nueva gestión pública*. Prentice Hall, 1-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=561192>
- Oliveira, M., & Vieira, O. (2019). Práticas de Governança Pública Adoptadas pela Administração Pública Federal Brasileira. *Administração Pública e Gestão Social*, 11(2), 1–16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?>

- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Petrescu, M. (2019). From marketing to public value: towards a theory of public service ecosystems. *Public Management Review*, 21(11), 1733–1752. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619811>
- Rao, C., & Yan, B. (2020). Study on the interactive influence between economic growth and environmental pollution. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(31), 39442–39465. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10017-6>
- Rojas Roque, L., Rivero Villar, J., & Montes de Oca Martínez, N. (2017). Metodología para la transición a un modelo de dirección estratégica sustentada en procesos. *Revista Ingeniería Industrial*, 16(3), 319–340. <https://doi.org/10.22320/S07179103/2017.19>
- Salas, K. (2020). Modelo de gestión según enfoque de gobernanza para mejorar la transparencia en las Municipalidades de la provincia de San Martín, 2018 [Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/50444>
- Salazar Raymond, M. B., Icaza Guevara, M. de F., & Alejo Machado, O. J. (2018). La Importancia De La Ética En La Investigación. *Universidad y Sociedad*, 10(1), 305–311.
- Stroinska, E. (2020). New Public Management as a Tool for Changes in Public Administration. *Journal of Intercultural Management*, 12(4), 1–28. <https://doi.org/10.2478/joim-2020-0048>
- Trigo, M., & Álvarez, V. (2017). Gestión pública, gobierno abierto y fortalecimiento de la democracia en América. In A. Naser, A. Ramírez, & D. Rosales (Eds.), *Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe* (Vol. 1, pp. 33–52). [www.cepal.org/es/suscripciones](http://www.cepal.org/es/suscripciones)

Zepeda, V. (2019). Paradigmas emergentes en la gestión pública en América Latina. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(86), 325-335.  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?>

# La gestión pública de gobiernos locales peruanos: un enfoque hacia la gobernanza eficiente

## **Rober Aníbal Luciano Alipio**

Doctor en Administración

Docente Principal - Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

Email: [rluciano@unaat.edu.pe](mailto:rluciano@unaat.edu.pe)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9555-6690>

## **Wilber Jimenez Mendoza**

Doctor en Administración

Docente Principal – Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Email: [wjimenez@unamba.edu.pe](mailto:wjimenez@unamba.edu.pe)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1103-6872>

## **Jose Carlos Vilca Narvaez**

Maestro en Gerencia Pública

Docente Asociado – Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Email: [jvilca@unamba.edu.pe](mailto:jvilca@unamba.edu.pe)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1446-3327>

## **Willian Perez Sullcaray**

Maestro en ciencias ingeniería, especialidad: planeación estratégica y gestión en ingeniería de proyectos

Docente Asociado- Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

Email: [wperez@unaat.edu.pe](mailto:wperez@unaat.edu.pe)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6320-0048>

## **Emérito Felipe Zavala Benites**

Doctor en Planificación y Gestión

Docente Asociado – Universidad Nacional de Trujillo

Email: [ezvala@unitru.edu.pe](mailto:ezvala@unitru.edu.pe)

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6520-4675>

ISBN 978-628-97086-5-3